

IMPACTO SOCIOJURIDICO DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA ORAL EN LOS
PROCESOS PENALES CONTRA ADOLESCENTES ADELANTADOS EN LA CIUDAD
DE BARRANQUILLA DURANTE LOS AÑOS 2012- 2014

JESSICA JULIETH GALVIS BALDOVINO

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ABOGADA

ASESORA

DOCTORA ALICIA ALVAREZ PERTUZ

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC

FACULTAD DE DERECHO

BARRANQUILLA- ATLÀNTICO

2015

IMPACTO SOCIOJURIDICO DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA ORAL EN
LOS PROCESOS PENALES CONTRA ADOLESCENTES ADELANTADOS EN
LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE LOS AÑOS 2012- 2014

JESSICA JULIETH GALVIS BALDOVINO

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE ABOGADA

Asesor:

DOCTORA ALICIA ALVAREZ PERTUZ

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC
FACULTAD DE DERECHO
BARRANQUILLA- ATLÀNTICO

2015

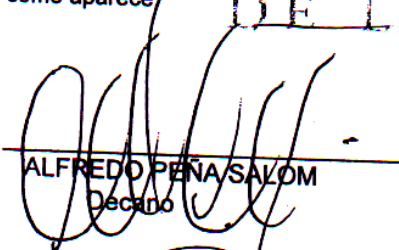
ACTA DE SUSTENTACIÓN TRABAJO DE GRADO

En Barranquilla a los 16 días del mes de Mayo del 2016 se reunieron en la Decanatura de la **UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC**, Facultad De Derecho los doctores ALFREDO PEÑA SALOM Decano, PIO CASTAÑO VEGA Y ALAIT FREJA CALAO jurados examinadores, y la suscrita secretaria académica, con el fin de practicar el examen de trabajo de grado a los señor (e) (s) JESSICA GALVIS BALDOVINO. Una vez leída la correspondiente ficha de estudio y revisado el concepto del director de trabajo de grado, se procedió a interrogar el examinado sobre el tema de trabajo que tituló "IMPACTO SOCIO JURIDICO DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA ORAL EN LOS PROCESOS PENALES CONTRA ADOLESCENTES, ADELANTADOS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE LOS AÑOS 2012-2014 .".

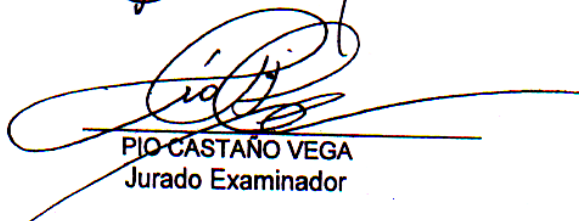
Finalizado el examen se procedió a calificarlo con votación secreta la cual dio resultado una calificación de Aprobado

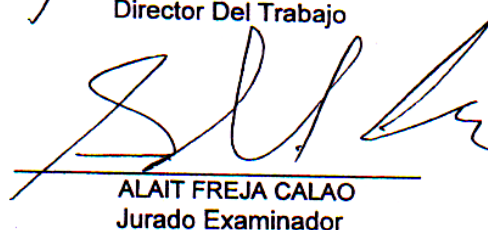


No siendo otro el motivo de la presente se da por terminado y para constancia se firma como aparece


ALFREDO PEÑA SALOM
Decano


ALICIA ALVAREZ PERTUZ
Director Del Trabajo


PIO CASTAÑO VEGA
Jurado Examinador


ALAIT FREJA CALAO
Jurado Examinador


IVANOV SARMIENTO PIMIENTO
Auxiliar Académico


IVAN ALEMAN PEÑARANDA
Director Del Centro De Investigaciones

Barranquilla, Noviembre del año 2015

Dedicatoria

A Dios, por darme la fuerza, la perseverancia y la sabiduría para seguir cuando el camino era más oscuro, para abrir puertas que parecían cerradas, por darme la capacidad de conquistar metas.

A mi Madre, por su Tenacidad, un reconocimiento especial por su voz de aliento y deseo de que siga adelante.

A mi abuela Graciela Baldovino y a mi tía Aminta Galvis por brindarme amor, comprensión y apoyo incondicional.

A todos los que de una u otra manera Han contribuido a enriquecer este Proyecto.

Nuevamente a Dios, el dador de la vida y de todo aquello que nos rodea, gracias a él y su misericordia se logró con éxito esta investigación.

Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.

—Hebreos 11:3

Yessica

Agradecimientos

Expreso mi más sincero agradecimiento:

A la Universidad de la Costa CUC.

A los docentes por sus valiosas orientaciones, enseñanzas, consejos y estímulos que contribuyeron a mejorar mi formación profesional.

A mi asesora, de manera especial, Dra. Alicia Álvarez Pertuz por su invaluable asesoría, sus orientaciones pertinentes y por compartir desinteresadamente sus amplios conocimientos y experiencia en la elaboración del presente documento.

A mis compañeros por su intercambio de saberes, experimenté con ellos que siempre hay algo nuevo por aprender.

RESUMEN

La presente investigación gira en torno al menor infractor y a la responsabilidad que le asiste a éste en la comisión del delito, haciendo un análisis sistemático de la situación y de los actores intervinientes en la problemática tales como la familia, el Estado y la sociedad, los cuales, bajo el principio de la corresponsabilidad deben aportar para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.

Esta es una investigación jurídica de corte analítico- descriptivo empleando el método deductivo, partiendo de una visión global, con el propósito de llegar a conclusiones y premisas de carácter particular como son los antecedentes y la actual situación del sistema penal acusatorio a los adolescentes de la ciudad de Barranquilla, para lo cual se realizó una amplia revisión y sistematización de diversos informes, estudios y estadísticas acerca del funcionamiento real del sistema de justicia juvenil.

A lo largo del presente trabajo se pudo observar que el tema de la responsabilidad penal de los adolescentes presenta ciertas deficiencias y se evidencia la necesidad de hacer ajustes al aparato jurisdiccional empezando con los funcionarios encargados de impartir justicia, a fin de garantizar el debido proceso dentro del marco de un sistema acusatorio, diferenciado respecto al sistema de adultos.

Palabras claves: Responsabilidad, adolescencia, sistema, justicia, adolescencia, igualdad, conciliación, infracción.

ABSTRACT

This research revolves around the young offender and the responsibility that it assists in the commission of the offense, making a systematic analysis of the situation and the actors involved in issues such as the family, the state and society, which, under the principle of shared responsibility should contribute to the integral development of children and adolescents.

This is a legal research descriptive analytic cutting using the deductive method, starting from a global vision, in order to reach conclusions and assumptions of particular character as are the background and current situation of the adversarial criminal justice system to teenagers Barranquilla.

To do a comprehensive review and systematization of various reports, studies and statistics is done giving an overall view about the actual operation of the juvenile justice system, which hinder the achievement of its aims, and intends to boost reforms consistent with the achievement of these objectives.

In the course of this study it was observed that the issue of criminal responsibility of adolescents has certain shortcomings and the need to make adjustments to the judicial apparatus beginning with the officials responsible for administering justice, to ensure due process is evident in the framework of an adversarial system, differential with respect to the adult system.

Keywords: Responsibility, adolescence, system, justice, adolescence, equality, reconciliation, infringement,

TABLA CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	9
CAPÍTULO I	
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	10
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	11
1.3 OBJETIVOS	
1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.....	12
CAPITULO II	
MARCO TEORICO	14
2.1 MARCO CONCEPTUAL	
2.2 MARCO HISTÓRICO	17
2.3 MARCO LEGAL	30
CAPITULO III	
3. DISEÑO METODOLÓGICO	
3.1 TIPO Y ENFOQUE DEL ESTUDIO.....	40
3.2 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	41
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	60
BIBLIOGRAFÍA	64

INTRODUCCIÓN

La presente investigación toma como punto de partida la expedición de la Ley de Infancia y Adolescencia, en la cual se regula el sistema de responsabilidad penal para las personas cuya edad oscile entre 14 y 18 años al momento de cometer un delito, de cara a lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la legislación Nacional a través del bloque de constitucionalidad, al igual que otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

Los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derechos y deberes, son responsables frente al Estado por el resultado de sus actos, y en consecuencia, les son aplicables las garantías fundamentales contenidas en la Carta Política y en los diferentes instrumentos internacionales, materializándose de esta manera una verdadera protección integral a estas personas, haciendo visible su prevalencia al interior de la sociedad.

Los diferentes Tratados Internacionales ratificados por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad, cuya prevalencia ha sido reconocida como corresponde, muestran de forma clara y precisa la legitimidad de los procedimientos adelantados en el marco del sistema de la responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes, así como el respeto por su dignidad.

Se busca esclarecer si existen o no prácticas diferenciadas entre el sistema penal de adultos y el de los adolescentes. El principio de oportunidad se aplicaría más del doble que en adultos.

I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Históricamente la respuesta a las infracciones cometidas por menores de edad, es en el fondo represiva, sin embargo, a partir del movimiento de los derechos de los niñas, niños y adolescentes, se intenta construir otro sistema de reacción volcado hacia la reconstrucción del estado de cosas antes del delito con la finalidad de restaurar, más que de sancionar, teniendo en cuenta que este fenómeno de la delincuencia por parte de los adolescentes obedece a múltiples causas y es resultado de la combinación de diversos factores de riesgo, pero básicamente, es una respuesta social que incluye a un alto porcentaje de juventud que, en la imposibilidad de integrarse a un sistema tanto en el orden material como en el social, va asumiendo una escala de antivalores tales como la violencia, la competencia, el consumo de alcohol y sustancias alucinógenas entre otros, que se imponen a los positivos valores establecidos por la sociedad, como por ejemplo, la tolerancia, la solidaridad y la justicia.

En el proceso de restauración se pretende concientizar al infractor de los daños, potenciar las capacidades afectivas y axiológicas para que no haya reincidencia (empoderamiento) porque la justicia restaurativa es mucho más amplia que la

punitiva, es decir, no es improvisada, aunque tenga menos formalismos y burocracia que la justicia penal de adolescentes.

Con el sistema oral se pretende que el adolescente reflexione sobre la conducta ilícita que cometió y el deber que le surge de indemnizar los perjuicios que ocasionó y entre las sanciones se encuentran: La amonestación, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida o vigilada, internación en medio semicerrado y la privación de la libertad que no puede ser superior a tres (3) años.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta la problemática expuesta se plantea inicialmente el siguiente interrogante:

¿Cuál ha sido el impacto socio jurídico de la aplicación del sistema oral en los procesos penales de los adolescentes en el distrito de Barranquilla durante los años 2012- 2014?

1.3 OBJETIVOS

Objetivo general

Evaluar el impacto socio jurídico del sistema oral en los procesos penales contra adolescentes en la ciudad de Barranquilla durante los años 2012- 2014.

Objetivos específicos:

- Describir el funcionamiento de la ley de responsabilidad penal del adolescente.
- Determinar si en los años 2012 al 2014 se ha dado cumplimiento a los objetivos trazados por la ley 1098/06.
- Identificar las causas y/o factores más recurrentes que inciden en la comisión de delitos por parte de los adolescentes, a través del manejo de estadísticas que permitan un acercamiento cuantitativo sobre el temático objeto de estudio.

1.4 JUSTIFICACIÓN

El sistema de responsabilidad penal para adolescentes consagrado en la ley 1098 de 2006 de acuerdo con su artículo 139, constituye el conjunto de principios, normas y procedimientos para los que intervienen en el juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el acto punible.

En tal sentido, se justifica un estudio socio jurídico que describa referentes conceptuales, hechos históricos y analice crítica y reflexivamente el desarrollo

histórico de la ley de adolescencia porque contribuirá significativamente a reconocer la transformación social, cultural y jurídica como una modalidad participativa de producción de conocimiento sobre la práctica.

Así las cosas, en la medida en que se puedan determinar las razones por las cuales los menores y adolescentes incursionan en actividades delictivas a tan temprana edad negándose la posibilidad de construir un proyecto de vida productivo para ellos, su familia y la sociedad, estamos frente a la posibilidad de proponer y generar cambios positivos que transformen la realidad social de hoy en día y se propicien cambios sociales que faciliten el desarrollo integral de los menores y adolescentes dentro de un ambiente de sana convivencia que los alejen de comportamientos dañinos para su formación personal.

2. MARCO TEORICO

2.1 MARCO CONCEPTUAL

- ✓ **ADOLESCENTES:** Son aquellas personas sujetos de protección social por parte del estado y que se caracterizan esencialmente porque no han cumplido la mayoría de edad, la cual en nuestro país se encuentra establecida en 18 años. Teniendo en cuenta las diferentes concepciones que pueden relevarse en torno a la adolescencia clásica y contemporáneas, podemos encontrar algunos rasgos más o menos comunes a ellas, sea desde el punto de vista biológico y fisiológico, en cuanto a desarrollo físico, durante ella se alcanza la etapa final del crecimiento, con el comienzo de la capacidad de reproducción: Pudiéndose decir que la adolescencia se extiende desde la pubertad hasta el desarrollo de la madurez reproductiva completa. No se completa la adolescencia hasta que las estructuras y procesos necesarios para la fertilización, concepción, gestación y lactancia no han terminado de madurar (Florenzano, 2005).

Desde el punto de vista del desarrollo cognitivo e intelectual en la adolescencia se ha venido caracterizando por la aparición de profundos cambios cualitativos en la estructura del pensamiento. Piaget denomina a este proceso, periodo de las operaciones formales, donde la actuación intelectual del adolescente se acerca cada vez más al modelo de tipo científico y lógico. Junto al desarrollo cognitivo, comienza con la adolescencia la configuración de un razonamiento social teniendo como relevancia los procesos identitarios individuales, colectivos y sociales, los cuales aportan en la comprensión del nosotros mismos, las relaciones interpersonales, las instituciones y costumbres sociales; donde el razonamiento social del adolescente se vincula con el conocimiento del yo y los otros, la adquisición de las habilidades sociales, el conocimiento y aceptación/negación de los principios del orden social, con

la adquisición y el desarrollo moral y valórico de los adolescentes.(Moreno y del Barrio, 2000).

El tratamiento de los menores infractores de la ley penal en Colombia ha sufrido un reciente cambio, se vive una transición. El adolescente, vinculado tradicionalmente a aquel grupo de personas denominadas inimputables, ha sido incluido en el conjunto de procesables en materia delictual. Ello obedece, por supuesto, a una política criminal que apunta a la reducción y eventual erradicación de la delincuencia juvenil. Con las medidas impuestas no se quiso envilecer al adolescente infractor, múltiples factores incitan a la criminalidad, gran cantidad de ellos de origen social y, por ende, ajenos a la voluntad del adolescente mismo¹. Los componentes criminógenos moldean al delincuente, casi que lo arrinconan, lo incitan a delinquir. El estado reconoció su incidencia en la malformación moral de las juventudes, es lógico que la sociedad y la administración pública asuman la responsabilidad²

- ✓ **Responsabilidad penal:** La responsabilidad en el sistema penal para adolescentes es el conjunto de normas o reglas de comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años de edad que han cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el estado e implementada por las instituciones y organizaciones sirviendo para garantizar que respeten los derechos de los adolescentes y permite que ellos se hagan responsable de las acciones que ellos hicieron corrigiendo sus errores con las personas a quienes hicieron daño. según Méndez Aquiles en su libro Ética

¹ El adolescente no es propiamente un gestor del tejido social, es más bien un resultado del mismo.

² El inciso segundo del artículo 44 de la carta política de Colombia señala lo siguiente “la familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”

Profesional define a la responsabilidad como sinónimo autentico de “conciencia”. La obligación de rendir cuenta de los propios actos.

La responsabilidad como deber es entendida como la obligación de responder de nuestros actos ante un tribunal. Se habla de responsabilidad moral cuando el tribunal es Dios o la propia conciencia, la responsabilidad legal (o específicamente, civil o penal) cuando el tribunal es el poder judicial. El autor agrupa los principales tipos de responsabilidades en tres clases: Responsabilidad profesional consigo mismo, responsabilidad profesional con el prójimo y responsabilidad profesional con la sociedad.

- ✓ **Delito:** El delito es definido como una conducta típica, antijurídica e imputable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta infraccional del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley (enciclopedia jurídica 2015). La palabra delito significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley.
- ✓ **Construcción social del concepto de niñez y adolescencia:** Teniendo en cuenta que el tema objeto de la presente investigación antes de ser un tema de carácter jurídico, es una disertación de naturaleza sociológica, motivo por el cual es imprescindible analizarlo previamente desde este último aspecto y así de esta manera lograr una mayor comprensión desde el ámbito de la legalidad.

2.2 MARCO HISTÒRICO

En Colombia en el siglo XIX, cuando los adolescentes infringían la ley penal no se preveía un tratamiento jurídico sancionatorio diferente al que se les otorgaba a

los adultos, no se atendía a sus condiciones especiales de desarrollo físico y psíquico era como si la categoría “niño”, como sujeto, no existiera.

En 1920 se crea una jurisdicción especializada para los adolescentes infractores de la ley penal; a pesar de que se les otorga un tratamiento diferente, son vistos como objeto de protección y no como sujetos de derecho.

A partir de la Convención de los Derechos del Niño se habla del concepto de “niño” como todo ser humano menor de 18 años de edad y la ley 1098 de 2006 define a los adolescentes como aquellas personas entre 13 y 18 años de edad y, en tanto personas, como sujetos de derechos y obligaciones.

Sin embargo, estas definiciones en torno a la infancia no siempre han sido las mismas a lo largo de la historia. La infancia no es una categoría ontológica, sino, que lo que hoy se entiende por infancia ha sido el resultado de un complejo proceso de construcción social (Acuña, 2008).

Luego en el siglo XX se les otorga la categoría de “menores” y eran tratados como objetos de cuidado y protección. De allí se derivó la existencia de dos tipos de infancia: La primera con sus necesidades básicas satisfechas, eran los niños y adolescentes y la segunda con sus necesidades básicas insatisfechas, total o parcialmente, los denominados “menores”, vistos como objetos de cuidado y protección, no como personas.

Para la categoría de la niñez y la adolescencia, la familia y la escuela cumplirán la función de control y sociabilización. Pero para los menores sería necesaria la creación de una instancia diferenciada de control socio- penal: El tribunal de menores, que buscarían suplir las deficiencias en las políticas públicas en torno a esta

población, inmiscuyéndose en cada uno de los movimientos de la vida cotidiana de los menores. Hasta el punto de que los que se encontraran en situación irregular, como por ejemplo en situación de abandono podían recibir las medidas que uno que hubiera cometido un delito (García, 1998).

A partir del paradigma de la protección integral, conformado por los Tratados Internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y las directrices de Riad, se empieza hablar del concepto de “niño” como sujeto de derechos, como una persona con derechos y obligaciones, con la posibilidad de que su opinión sea tenida en cuenta dentro del proceso de responsabilidad penal que se adelanta contra él.

En consecuencia, las nuevas leyes, inspiradas en el paradigma de la protección integral (entre estas la ley 1098 de 2006) se proponen como un instrumento para la infancia y no solo `para aquellos en situación de vulnerabilidad; como consecuencia se eliminan las internaciones que no estén vinculadas a la comisión comprobada de un delito, y se crea un procedimiento más acorde con esta nueva noción de infancia.

El desarrollo histórico del tratamiento que las instituciones formales (policía, jueces, correccionales, etc.) le han otorgado a los adolescentes que infringen la ley penal, se ha alimentado de los principios rectores de tres paradigmas del derecho penal: El clásico (vigente desde el código de Santander de 1837 hasta 1919) , el causalista de la situación irregular (que tiene su origen con la ley 98 de 1920 con la que se crea la jurisdicción especial para menores y subsiste hasta el 14 de marzo de 2007) y el garantista de la protección integral (que se inicia a partir del 15 de marzo de 2007, fecha en que entra en vigencia la ley 1098 de 2006).

En este mismo sentido la ley de 1991³ en su artículo 40 reconoce la importancia de reintegrar al menor infractor al seno de su comunidad para que “este asuma una función constructiva en la sociedad”.

Tabla 1. Edad de responsabilidad penal juvenil en diversos países

País	Edad mínima a partir de la cual existe responsabilidad penal y se aplica el Derecho Penal de menores	Edad a partir de la cual existe responsabilidad penal adulta y se aplica el Derecho Penal ordinario
Alemania	14	18-21
Argentina	16	18
Austria	14	18-21
Banladesh	7	12
Brasil	12	18
Bulgaria	14	18
China	14	18
Dinamarca	15	15-18
Escocia	8-16	16-21
Eslovaquia	15	18
España	14	18
Estonia	14	18
Grecia '	13	18-21
Hungría	14	18
India	7	12 '
Italia	14	18-21
Japón	14	20
Latvia	14	13
Países Bajos	12	18-21
Perú	12	18

³ Ley que integra la convención internacional de los derechos del niño al ordenamiento jurídico colombiano.

República Checa	15	18
Rumania	16-18	16-18-21
Taiwán	14	18
Turquía	11	15
Vietnam	14	18

Evolución histórica de la responsabilidad penal de los menores y adolescentes.

Pese a la dificultad de determinar cuál ha sido la condición jurídica del menor infractor en los pueblos de la antigüedad, por la falta de fuentes del Derecho, podemos encontrar en el Derecho romano referencias notables. Concretamente a este Derecho se debe la clasificación de los menores (infantes, impúberes, menores) y la creación del criterio del discernimiento, que legislaciones de todo el mundo aplicaron durante muchos siglos.

No obstante, tal hecho no permite suponer la existencia de un sistema propiamente dicho, sino simplemente una diferencia en el tratamiento del menor y del adulto. Así las cosas, partiendo de tal referente romano, se analizará sucintamente los antecedentes de la minoría penal en el derecho germánico y en el canónico⁴.

El sistema actual:

A partir de Código español de 1932 y el colombiano de 1936, el criterio del discernimiento fue desplazado por el biológico para determinar la imputabilidad

⁴ Pérez vitoria, Octavio. Tesis minoría penal, 1940

del menor. Así, actualmente, en España y en Colombia, las legislaciones que prevén la responsabilidad penal del menor lo toman como fundamento.

Modelo tutelar

Con la aparición de las escuelas Positiva y Correccionalista, cambia la perspectiva del discernimiento y la consiguiente responsabilidad del menor. Así, conforme a ciertos límites, se extrae a la delincuencia de menores del Derecho Penal y al margen de toda idea de culpabilidad, se prescinde de su castigo en favor de la tutela protectora.

Desde una mirada de la defensa social y de las primeras corrientes humanizadoras se pensaría que es necesario establecer un nuevo sistema protector que adoptando un procedimiento de carácter educativo logre la corrección de quienes, a pesar de su inimputabilidad por su menor edad, no dejan de ser autores de hechos ilícitos.

Así las cosas, el modelo tutelar propone sustituir la responsabilidad penal y la pena por la peligrosidad o necesidad de protección del menor por medio de medidas educativas y correctoras impuestas por autoridades de menores con la aplicación de un procedimiento apartado de las garantías jurídicas.

Nacimiento de la jurisdicción especializada:

Al analizar el nacimiento del primer Tribunal de Menores en Illinois, Estados Unidos, 1899, es común que los autores subrayen las ventajas de su creación por la especialización que se empezó a gestar en el tratamiento de los menores infractores. En efecto, con su creación por primera vez, se reconoció que el menor debía tener un Derecho propio basado en la reeducación, y (no en una penalidad atenuada, cuyo

beneficio finalmente se veía resquebrajado al aplicar y ejecutar las medidas del ámbito penitenciario adulto).

La creación de los tribunales de menores en Illinois fue la culminación de esfuerzos de carácter conservador en favor de los menores en “situación irregular”⁵, definición que cubría a los abandonados, maltratados o delincuentes. Si bien su existencia se considera el punto de partida del modelo tutelar y/o protector, que en su momento supuso un avance en las garantías para el menor.

La judicialización del abandono:

En el anterior panorama influido por las ideas del positivismo, los reformatorios fueron propuestos como el lugar en el que el menor podía ser convertido en una persona que no infringiera la ley⁶ dentro de un marco paternalista y una nueva penología que rectificaba el status dependiente de los niños al desconocerles sus derechos jurídicos.

Los menores considerados en peligro potencial de delinquir eran remitidos a estos lugares. Se estimaba necesario sacarlos del entorno que los había hecho caer en esa degeneración, bajo el entendido de que el reformatorio, con su estricta disciplina, compensaba la vida familiar deficiente en las clases "miserables".

Tal como se ha analizado, dentro de este contexto se enmarca la definición de "situación irregular", en la cual se involucraban determinadas conductas que reflejaban un potencial delictivo en los menores, que no era otra cosa que una criminalización del abandono. En efecto, el concepto "irregular" judicializaba los

⁵ Alastuey Do-Iion. Carmen. El derecho penal de menores: Evolución y rasgos esenciales de la ley orgánica 5 de 2000. Ed. Tecno. Madrid.2003, p.1535.

⁶ Platt, Anthony. Los salvadores de niños. La invención de la delincuencia. México. Siglo XXI.Ed.1988.p.82

problemas de los menores, en una "Clara tendencia a patologizar situaciones de origen estructural". (García Méndez, Emilio. 1991).

Como piedra angular del problema viene la "indistinción" entre abandonados y delincuentes, lo que justificaba un control penal respecto a la juventud, que en su "mala conducta" era considerada predelincente. Este ámbito de aplicación del modelo tutelar es reconocido en toda la doctrina, que le da denominaciones diferentes, niños abandonados, dependientes o anormales pero con el mismo contenido: la extensión de medidas coactivas frente menores considerados potenciales delincuentes.

En efecto (García Méndez, Emilio. 1991) dice que no fueron pocos los cuestionamientos. Se puede destacar entre ellos:

1. Se discutió la ineficacia del sistema tomando en cuenta la amplitud del enfoque. Ciertamente el hecho de que se ocupara en situaciones tan diversas como los niños abandonados, las transgresiones juveniles (abandono de la escuela, fuga del hogar, etc.), y la comisión de hechos delictivos, no permitía la adecuación de la actividad judicial, la cual no siempre se inclinaba en interés del menor;
2. Los avances científicos en las ciencias de la conducta y la criminología pusieron de manifiesto el fracaso del sistema. Se demostraba que no existía una mejora personal en el menor, ni una reducción de las tasas de reincidencia;
3. De forma categórica la doctrina cuestionó la ausencia de garantías legales para el menor a quien no lo cobijaban principios como el de legalidad o el de proporcionalidad. En efecto, bajo la idea de que en el bien no hay exceso, se aplicaban toda serie de arbitrariedades contra el menor infractor, como la sentencia indeterminada o la ausencia de abogado que lo asistiera durante la actuación.

Cambio de esquema: A finales del siglo XIX se empezó a gestar la discusión en tomo a la intromisión del *iuspuniendi* en conductas referidas a los niños, que nada tenían que ver con infracciones a la ley penal: Así lo menciona Platt al relatar que entre 1882 y 1917 se impugnó ante la Suprema Corte de Illinois la constitucionalidad de las leyes de las escuelas industriales, en donde se recluía a los niños llamados dependientes; instituciones que lejos de ser educativas tenían carácter penal, en el que se privaba a los niños de la libertad sin un debido proceso⁷.

Este nuevo modelo estuvo marcado por el rechazo en principio de la contención física, el acento con fuerza del carácter terapéutico de las intervenciones y su estrecha vinculación a las necesidades del menor. En efecto, frente al modelo anterior, en el que el Estado pretende, por decirlo de alguna forma, ejercer la patria potestad del joven delincuente, este modelo busca no desarraigar al menor de su entorno, y desde este potenciar su educación evitando su contacto con el aparato punitivo⁸. Así, el tratamiento dado al menor infractor estaría más cercano a la asistencia social especializada. Con el tiempo, estas tareas fueron trasladándose a agentes diversos a los gestores de la represión.

Al igual que en el caso español, en Colombia no es posible encontrar vestigios del modelo educativo en la reacción frente al menor infractor. Si bien entran en escena organismos administrativos para el manejo de conductas antisociales de los menores de doce años, como el caso de la División de Menores del decreto 1818 de 1964, luego desplazadas al ICBF con la ley 75 de 1968, lo cierto es que no existen para la época analizada mecanismos extrajudiciales definidos frente a los menores infractores.

⁷ Platt.op.cit.p.131

⁸ Gómez Rivero, María del Carmen, la nueva responsabilidad penal del menor y sus leyes orgánicas 5 de 2000 y 7 de 2000, en RP, Num.9,La ley, enero 2002.p.6

El menor infractor como sujeto de derechos evolución de la noción en el modelo de responsabilidad y los modelos actuales

El cuestionamiento frente a la ausencia de garantías: Dentro del marco del modelo tutelar y *del* educativo, el menor infractor había "salido" del Derecho Penal adulto. En efecto, mientras que el modelo tutelar partía de un derecho protector frente al menor que delinquía, el modelo educativo mantenía un esquema penal con matizaciones que veía en los instrumentos extrajudiciales o en aquellos alternativos que evitarán al máximo el contacto con el aparato punitivo la mejor opción para reaccionar frente a este.

Los argumentos de los dos esquemas llegaban a un mismo punto, su distanciamiento total o preferente del esquema punitivo adulto. Concretamente, en el modelo tutelar la reacción aplicable a los menores infractores fue definida como "no penal", ya que, según se ha referido antes, como consecuencia de tendencias humanitarias' y correccionalistas se consideraba que el Derecho Penal había desaparecido respecto a los niños y jóvenes delincuente.

En lo que tiene que ver con el *modelo educativo*, su rechazo en principio de la contención física, el subrayado con fuerza del carácter terapéutico de las intervenciones y su estrecha vinculación a las necesidades del menor, hacían que el tratamiento dado al menor infractor estuviera más cercano a la asistencia social especializada.

Así pues, desde ángulos similares, esta pretensión de aplicar un Derecho diferente al menor infractor, según una parte de la doctrina trajo consigo "autonomía" respecto a las garantías constitucionales.

El modelo de responsabilidad o de justicia o modelo educativo-responsabilizador

Origen: El modelo de responsabilidad se empieza a gestar a raíz de la nueva concepción del menor como sujeto de derechos.

Entra así en crisis el concepto de irresponsabilidad de los menores mayores de cierta edad ante la comisión de un ilícito penal, ya que se entiende que considerarlos responsables forma parte del proceso educativo. Así pues, dentro de este modelo se rechaza el paradigma de la inimputabilidad, y se admite una capacidad elemental de responsabilidad de los menores, es decir, la capacidad de asumir la consecuencia de sus actos. Ahora bien, dicho reconocimiento no debe llevar necesariamente a un modelo penal-represivo, ya, que en razón de las particularidades del menor, se debe acudir a una fórmula propia y autónoma. (Díaz Cortez, Lina. 2015)

En efecto, se parte de un sistema penal de menores basado en la consideración del menor como sujeto de derechos, que si bien tiende a asimilarse al de adultos al arrancar del presupuesto de la responsabilidad penal de los menores a partir de determinada edad y promover una transferencia del Derecho Penal y Procesal Penal de menores de las garantías dadas a los adultos, tiene matizaciones marcadas por el interés superior del niño.

El cambio de paradigma: El menor como sujeto de derechos

Desde que se aprobó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CIDN) ratificado por Colombia en 1.990, se asume la figura de éstos como sujetos de derecho (Derechos fundamentales de cualquier persona y los que se contienen en los derechos del niño)

Tal modelo se transformó en la llamada Doctrina de la protección integral, cuyo fundamento se extrae de un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales que se basan en un concepto diferente de infancia: el niño como sujeto de derechos. (Díaz Cortes, Lina. 2004). Ella afirma que la distinción entre el adulto y el menor que hoy reconocemos, fue resultado de un proceso histórico y por eso hoy se habla de una “ciudadanía del menor” para significar su categoría de persona y, por ende de sujeto de derechos, constituyéndose en un concepto del que debe partir cualquier discusión en torno al menor infractor.

La Convención de los Derechos del Niño de 1989 es el pilar de esta doctrina. Si bien, esta normativa no es la primera en el orden cronológico⁹, tuvo el mérito de llamar la atención sobre el manejo arbitrario de la infancia. Planteó una percepción radicalmente nueva del menor, otorgándole una precisa categoría jurídica y abandonando el discurso pseudo-proteccionista que lo tomaba como una vaga categoría social utilizaba eufemismos para tapar un sistema punitivo sin límites ni garantías.

El modelo de responsabilidad en el derecho colombiano.

En Colombia se han adoptado diferentes instrumentos internacionales en materia de menores, los cuales forman parte del llamado Bloque de Constitucionalidad. En

La necesidad de protección especial al niño ha sido enunciada en la declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño, en la declaración de los derechos del niño adoptada por la asamblea general el 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la declaración universal de los derechos humanos, en el pacto internacional de derechos civiles y políticos, en el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Concretamente sobre la justicia de menores, las reglas mínimas de las naciones unidas para la administración de justicia de menores o llamada reglas Beijing expedidas en 1985.

efecto, en Colombia, si bien la Constitución es norma de normas¹⁰, al lado de ella se encuentran todos los instrumentos internacionales ratificados por el poder legislativo.

En este sentido, el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia señala: "Los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Esta disposición sirvió de fundamento para que la Corte Constitucional Colombiana, en sentencia C-225 de 1995 (M. P., Alejandro Martínez Caballero), definiera el bloque de constitucionalidad¹¹ como compuesto de las normas y principios, que pese a no aparecer formalmente en el texto constitucional, deben ser integrados en la Constitución.

Se entiende que los instrumentos internacionales señalados forman pieza importante para la interpretación de las leyes nacionales en materia de menores infractores. Esta afirmación se ve reforzada por la remisión a los tratados internacionales del artículo 44 de la Carta Política de 1991, que establece que los niños: "gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

¹⁰ CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Constitución política. Art. 4º: "La constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la constitución y la ley u, otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales..."

¹³ Esta figura, según la corte, proveniente del derecho francés, ha hecho carrera en el derecho constitucional comparado. Con ella se permite armonizar los principios y mandatos aparentemente en contradicción del artículo 4º y 93 de la Carta Constitucional Colombiana.

En este acápite entraremos a analizar las características del modelo adoptado por la legislación colombiana haciendo mención a la ley 1098 de 2006, creadora del Código de la Infancia y la Adolescencia, el cual regula la responsabilidad penal de los niños y adolescentes y por medio del cual Colombia entraría en el esquema de responsabilidad frente al menor infractor.

Con posterioridad a la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989, en Colombia se expidió mediante el Decreto 2737 de 1989, el Código del Menor. Este código, que entró en vigencia el 1º de marzo del 1990, reúne los aspectos institucionales fundamentales relacionados con menores.

Pese a la anterior diferenciación, lo cierto es que se mantuvo, englobando en el concepto del menor en situación irregular, desde el menor que se encuentra en situación de abandono o peligro, hasta el menor autor o partícipe de una infracción penal. Esta es la característica que mejor denota la persistencia en el tratamiento al menor infractor como tutelar.

La consagración en el artículo 22 de su finalidad política criminal, ratifica su permanencia en el modelo protector. En efecto, el artículo textualmente señala: La interpretación de las normas contenidas en el presente Código deberá hacerse teniendo en cuenta que su finalidad es la protección del menor, de tal manera que las medidas que se han de adoptar respecto al menor infractor deben tener un contenido educativo que estimule su proceso de socialización, razón por la cual resulta dudoso que esto se pueda obtener mediante la privación de la libertad.

En otras palabras: es controvertible que se busque la protección del menor privándolo de la libertad, además de lo contradictorio que supone que quitando la libertad, se pretenda enseñar a vivir en libertad, pues al padecimiento corporal que el

individuo sufre con la privación de aquella, se suma la aflicción psicológica causada por el aislamiento, la pérdida de socialidad y afectividad; y es que, aunque la ubicación institucional, eufemismo utilizado en lugar de reclusión, es una de las medidas aplicable por excelencia.

Respecto a la consideración del menor como inimputable o no, desde la perspectiva normativa, pues se supone que es inimputable, partiendo de un criterio biológico puro. “En efecto, esta consideración del menor como inimputable es expresamente señalada en el artículo 165 del Código, en el cual se establece: Para todos los efectos se considera inimputable el menor de dieciocho años.

En lo que tiene que ver con las garantías constitucionales, ante el menor que infringe la ley penal, el Código del Menor establecía en su artículo 17: "Todo menor que sea considerado responsable por haber infringido las leyes, tiene derecho a que se respeten sus garantías constitucionales y procesales, así como a la asistencia jurídica adecuada para su defensa". Pese a la anterior disposición, lo cierto es que a lo largo del Código se plasman disposiciones en contra de estas garantías.

2.3 MARCO LEGAL

La problemática que se genera a raíz de la participación de los menores y adolescentes en la comisión de delitos es una situación que afecta gravemente la

estructura social del país y amerita una intervención oportuna del Estado, la familia y la sociedad, quienes bajo el concepto de corresponsabilidad asuman un papel activo en la recuperación de los menores infractores con la implementación programas y políticas públicas, así como la expedición de una normatividad efectiva y garantista de los derechos fundamentales de esta población en estado de vulnerabilidad.

Legislación Internacional: Los menores de edad en Colombia están plenamente protegidos, no solo por el ordenamiento constitucional y la ley 1098 de 2006, sino también, por el derecho internacional.

El artículo 6 del Código de la Infancia y **Adolescencia** establece que las normas de la Constitución Política y del Derecho Internacional forman parte integral del mismo y deben servir de guía para su interpretación y aplicación. Además, el artículo 93 de la Carta Magna dispone que debe darse aplicabilidad a los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos. En primer lugar y de manera especial como lo establece el artículo 5° de la ley 1098, la Convención Internacional de los Derechos del Niño¹² CIDN que proporciona el marco general de interpretación de la normativa referida a los derechos de la niñez, incluida la relativa a la Administración de justicia de menores, la prevención de la delincuencia juvenil y a los menores privados de la libertad.

Al respecto cabe citar la siguiente normatividad:

- ✓ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante ley 74 de 1968;

¹² Adoptada por la Asamblea general de las naciones Unidas el 20 de noviembre de 1.989; entró en vigor el 2 de septiembre de 1.990 ratificada por Colombia mediante la ley 12 de 1.991

- ✓ La Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante ley 16 de diciembre de 1972;
- ✓ Las Reglas de Beijing o Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de Menores de 1985;
- ✓ las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad de 1990 y
- ✓ La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por ley 12 del 22 de enero de 1991¹³.

Marco normativo Nacional:

✓ La Constitución Política de Colombia de 1991:

Ratifica las consideraciones de niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Mediante los artículos 44 y 45 se plantean los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo que prevalecen sobre los derechos de los demás y que gozan de todos los derechos consagrados en la Constitución, las Leyes y los Tratados Internacionales ratificados por Colombia.

✓ Ley 98 de 1920.

Siguiendo la tendencia que en el ámbito internacional se venía desarrollando, por medio de la ley 98 de 1920 en Colombia se creó la

¹³ Pérez Pinzón, Alvaro Orlando. Situación actual del derecho de los menores en Colombia, en RP, Num.5 p.158

jurisdicción especial para menores. En efecto, bajo la vigencia del Código Penal de 1890 se dictó la ley 98, que sin apartarse de la concepción romana, instituyó esta jurisdicción para menores y sentó las bases para la protección y preservación de niños de entre siete y diecisiete años.

Con esta ley se inició el modelo tutelar en Colombia. En efecto, la ley 98 estableció un nuevo sistema punitivo para los menores, consagrando un procedimiento verbal, breve y sumario, para su juzgamiento. Concretamente, siguiendo el modelo tutelar, dispuso que el juez podía dictar la medida que estimara necesaria sin importar la menor o mayor gravedad del delito cometido. Dicha medida podía escoger dentro de un catálogo, que iba, desde la permanencia en su hogar bajo la vigilancia del juzgado, hasta el internamiento en una casa de reforma y de corrección por tiempo indeterminado.

Siguiendo el esquema tutelar, la ley 83 deroga los artículos del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal (ley 94 de 1938), relacionados con las medidas y el procedimiento respecto a los menores infractores, reglamentando de forma íntegra lo concerniente a las medidas que se han de imponer y el procedimiento para los menores delincuentes. En efecto, se mantiene la idea según la cual el menor había salido del Derecho Penal básicamente represor y se establece mediante la ley 83 una tutela especial.

En el artículo 1º dispuso: "El menor de dieciocho años, hombre o mujer, que cometa alguna infracción penal, o que se halle en estado de abandono o de peligro

moral o físico, será sometido a las medidas de asistencia y protección preceptuadas en esta ley".

✓ **La ley 83 en 1946**

Llamada ley orgánica de la defensa del niño con un carácter superior jerárquicamente a la ley 98 de 1.920 y bajo la ideología de la “situación irregular” en la cual se estableció la obligación de instalar un juez de menores para conocer en única instancia de las infracciones penales cometidas por menores de 18 años.

✓ **Ley 75 de 1968.**

Posteriormente se expidió esta ley, cuyo artículo 51 suprimió la División de Menores como organismo del Ministerio de Justicia y se adscribió como parte integrante del Instituto de Bienestar Familiar, en adelante ICBF. Es decir, esta entidad pasó a tener competencia sobre los menores de doce años que infringieran la ley penal.

Por recomendación del VI Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal, celebrado en Roma en 1953, se recomendó como edad mínima para efectos penales la de dieciséis años.

Frente a esta reducción en la edad penal, tratando de paliar el enfrentamiento del menor entre dieciséis y dieciocho años a las instancias penales adultas, el Decreto 398 de 1969 estableció (cap. II, art. 14), que la detención preventiva del menor se practicara en establecimiento especial.

Ya en 1989 se proclama la convención Internacional de los Derechos del niño (CIDN) y con ella se impone la concepción del niño, niña y adolescente como sujeto de derechos y obligaciones, reconociéndolo como persona capaz de auto determinarse y por lo tanto de responder por sus actos es decir lo considera imputable.

Ese mismo año se expide en Colombia el decreto 2737 más conocido como el código del menor pero considerándolo como objeto de protección- represión. Y es así como una década después se adapta la realidad del sistema tutelar a la constitución misma de 1991, al cual le dio a los niños, niñas y adolescentes un papel casi protagónico al establecer la prioridad de sus derechos sobre los de los adultos y dando un carácter fundamental a una serie de derechos especiales para ellos.

Del mismo modo y debido a la agravación de la problemática social que genera la delincuencia juvenil, legislativamente se iniciaron discusiones de proyectos que pretendían modificar las legislaciones de menores vigentes.

De esta forma es aprobada en el 2006 la ley 1098 más conocida como Nuevo Código de Infancia y Adolescencia

Ley 1098 de 2006

Llamada también Ley de Infancia y Adolescencia en busca de zanjar la discusión en torno a las limitaciones de garantías al menor infractor del Código del Menor, no

fueron pocos los intentos para la reforma dicho estatuto, y concretamente fueron múltiples las iniciativas para la adopción de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. En su artículo 191 se establece la detención en flagrancia, el cual reza que el adolescente será conducido de inmediato ante el Fiscal delegado para la autoridad judicial quien a las 36 horas siguientes lo presentará al Juez de control y garantías para que se cite a audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. Al averiguar la presunción de edad el defensor verificará la edad del niño, niña o adolescente por medio del documento de identificación (tarjeta de identidad o registro civil. Cuando no sea posible verificar la edad en forma inmediata, se aplica el principio de presunción de minoría de edad¹⁴.

La instauración del modelo de responsabilidad frente al menor que infringe la ley, si bien se reconoce que el sistema es de carácter penal, identifica las medidas que dentro del mismo proceso se adopten como de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del de los adultos, conforme a la protección integral. Tal inclinación no implica que los niños, niñas y adolescentes puedan ser afectados en sus derechos y garantías, (ley 1098 de 2006, art. 140).

Al respecto se establecen dos franjas de edad: a) los adolescentes, menores de catorce años y b) los adolescentes entre catorce y dieciocho años. Así, a los primeros se establece la exclusión de la responsabilidad penal, es decir, que la edad de catorce

¹⁴ Artículo 3 parágrafo 1º del código de la infancia y la adolescencia “en caso de duda sobre la mayoría o minoría de edad, se presumirá esta. En caso de dudas sobre la edad del niño, niña o adolescente se presumirá la edad inferior. Las autoridades judiciales y administrativas, ordenaran la práctica de las pruebas para la determinación de la edad y una vez establecida, confirmarán o revocarán las medidas y ordenaran los correctivos necesarios para la ley.

años se estableció como límite mínimo a partir del cual se podía exigir responsabilidad penal.

Además se dispone que lo no regulado en la ley 1098 de 2006, relativo al procedimiento aplicable, se seguirán las normas consagradas en la ley 906 de 2004, equivalente a la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, excepto aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente.

Así mismo la jurisdicción indígena, la cual dispone en el artículo 156 que los adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas serán juzgados según las normas y procedimientos de sus propias comunidades, conforme a la legislación especial indígena consagrada en el artículo 246 de la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y la ley. Dicha disposición se respetará, siempre y cuando la sanción impuesta no sea contraria a su dignidad.

Despenalización.

La despenalización a ultranza (descriminalization) implica una reducción en el campo de aplicación de la justicia de menores, esto se puede llevar a cabo en el ámbito objetivo, es decir, en el campo de las conductas que se consideran punibles en los menores.

Una delimitación en el campo objetivo se logra mediante instrumentos como: la reducción de los tipos penales cuyo verdadero alcance no pueden comprender como las falsedades documentales o tráfico ilegal de especies protegidas; la eliminación de

figuras que no son adecuadas para el proceso de desarrollo moral del menor, como la agravación por la actuación en grupo, tomando en cuenta que la participación en conjunto es definida como un aporte en favor de su socialización.

La justicia restaurativa.

Mencionar la justicia restaurativa supone referirse, en primer término, a situaciones como la crisis del sistema penitenciario punitivo como esquema resocializador; y también, a expresiones como la especial referencia a la víctima, la reconciliación y la responsabilización. Las primeras son situaciones que argumentan el nacimiento de la justicia restaurativa, en tanto que las segundas se refieren a consecuencias de su aplicación. La justicia restaurativa de menores que transgreden la ley penal se trata en el fondo de un asunto de políticas públicas, es decir, la decisión del estado en cuanto a qué hacer con individuos menores de edad que se involucran cada vez con mayor virulencia en la dinámica de la criminalidad, particularmente en el crimen organizado y en la violencia social. La respuesta más fácil es endurecer el control disfrazando una respuesta represiva bajo el ropaje de un supuesto “garantismo penal”. Lo más difícil, por el contrario, es pensar en un modelo de justicia que responda a lo que las Naciones Unidas llama: “el interés superior del niño”, que no es otra cosa que la efectiva realización de los derechos de protección, acceso a la justicia e inclusión social de la infancia- adolescencia tanto infractora como no infractora. (Correa García, Sergio, 2005)

El modelo reparador en la delincuencia juvenil. Al igual que en el caso del sistema de justicia tradicional, el interés por la justicia reparadora ha aumentado gracias a la crisis que está padeciendo el ideal resocializador dentro del actual

sistema punitivo. Salvo contadas excepciones, los Estados establecen cada vez sanciones más severas y similares a las de los adultos, y desplazan la especialidad y flexibilidad que en principio debe tener un régimen penal para los menores delincuentes.

Ante esta situación, se propone un modelo reparador que dentro del contexto de justicia restaurativa expuesto pretende tomar en cuenta los siguientes aspectos en el sistema de justicia juvenil:

1. Los motivos desencadenantes de la infracción y el daño cometido;
2. La reducción de las posibilidades de reincidencia mediante la responsabilización del menor;
3. La incorporación de los intereses de la víctima y la comunidad, como afectados por la violación de la norma. (García Ramírez, Sergio. 1993).

Por recomendación del VI Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal, celebrado en Roma en 1953, se recomendó como edad mínima para efectos penales la de dieciséis años.

III DISEÑO METODOLOGICO

3.1 Tipo y enfoque del estudio

Esta es una investigación jurídica de corte analítico - descriptivo, ya que además de realizar una descripción de los diferentes postulados y características del tema de estudio, se hará un análisis de los mismos con el fin de estudiar su impacto.

En la realización de la presente investigación se empleara el método deductivo, partiendo de una visión global, con el propósito final de llegar a conclusiones y premisas de carácter particular como son los antecedentes y la actual situación de Sistema Penal Acusatorio aplicado a los adolescentes de la ciudad de Barranquilla.

Conjuntamente se usarán fuentes primarias y secundarias, las leyes, la jurisprudencia, la doctrina y escritos que procedan de fuentes primarias. También se usa el contacto con la realidad de las diferentes posiciones jurídicas y políticas para entender el por qué de la existencia de un marco jurídico nacional e internacional para la evaluación del sistema penal acusatorio en la ciudad de Barranquilla.

Como instrumento de investigación se utilizarán las estadísticas de los procesos llevados a cabo en la ciudad de Barranquilla, con adolescentes.

3.2 Fuentes de recolección de la información

Gestión Institucional Intervención a la violencia de adolescentes en Pandillas “Va Jugando”

Tabla 1

Localidad	Barrio	Población participante aprox.
Suroccidente	Lipaya	13
	El bosque	55
	Las Malvinas	33
	La esmeralda	17
Metropolitana	Santo Domingo de guzmán	72
	San Luis	71
	Santuario	20
	Las Américas	104
	Carrizal	72
	Santa María	12
	7 de abril	12
Riomar	La playa	162

Fuente: www.barranquilla.gov.co

La administración distrital articuló esfuerzos y recursos con las entidades educativas y de formación atendiendo a 568 adolescentes que demostraron el compromiso con el proceso de transformación de hábitos y comportamientos que perjudicaban su salud y relaciones interpersonales y sociales.

Es así como entre agosto y noviembre de 2013, cerca de 200 jóvenes recibieron en sus barrios, por parte del SENA y de instructores profesionales, capacitación especializada en soldadura, mecánica, bisutería, piscicultura, tatuaje y manicure. Pasantía al Sena que motivó a los jóvenes, iniciar su proceso de vinculación o reiniciar en algunos su ingreso a los estudios.

El modelo de atención integral a jóvenes en pandillas del Distrito está concebido desde lo teórico práctico, la reinserción de jóvenes está precedida de una serie de factores tanto internos como externos que los afectan, que pueden pasar por los conflictos familiares, situación económica, necesidad de reconocimiento, exclusión, falta de autoestima, que desembocan en actitudes, pensamientos, comportamientos y acciones violentas revisadas desde la caracterización.

Se realiza seguimiento a la participación de las diferentes secretarías y del Distrito en la atención a los jóvenes en el SRPA (Sistema de Responsabilidad penal para adolescentes). Los jóvenes a nivel de salud, reciben jornadas de salud mental, salud

oral, vacunación, rumbaterapias, salud sexual, información de enfermedades de notificación pública.

También se les brinda apoyo en la parte vocacional y académica en el colegio Jorge Nicolás Abello graduando a jóvenes del Oasis y con déficit de lectoescritura son nivelados, participan en proyectos de interés relacionados con la expresión y la comunicación, tiempo libre y recreación.

Se avanza en la construcción y operatividad del modelo de justicia restaurativa con el desarrollo de cuatro (4) talleres, tema que debe introducirse en el manejo de procesos, espectro de las prácticas restaurativas, necesidades de las víctimas, usos diversos de las reuniones restaurativas, características y beneficios de las mismas, entre otras, lo cual requiere de implementación con los diferentes actores que participan en el proceso, como son las entidades del sector público, sociedad civil, familias y comunidades en general.

Las entidades que participan en la construcción de este proyecto son:

- ✓ Consejo superior de la judicatura – Sala administrativa
- ✓ Jueces penales de adolescentes
- ✓ Fiscalía General de la Nación
- ✓ Procuraduría General de la Nación

- ✓ Policía de Infancia y Adolescencia
- ✓ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ✓ Defensoría del Pueblo

Consideran todas estas entidades poner en práctica el objetivo de la Ley de Infancia y Adolescencia en la ciudad de Barranquilla, cuya finalidad es la de garantizar a los adolescentes un pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente que facilite su desarrollo integral.

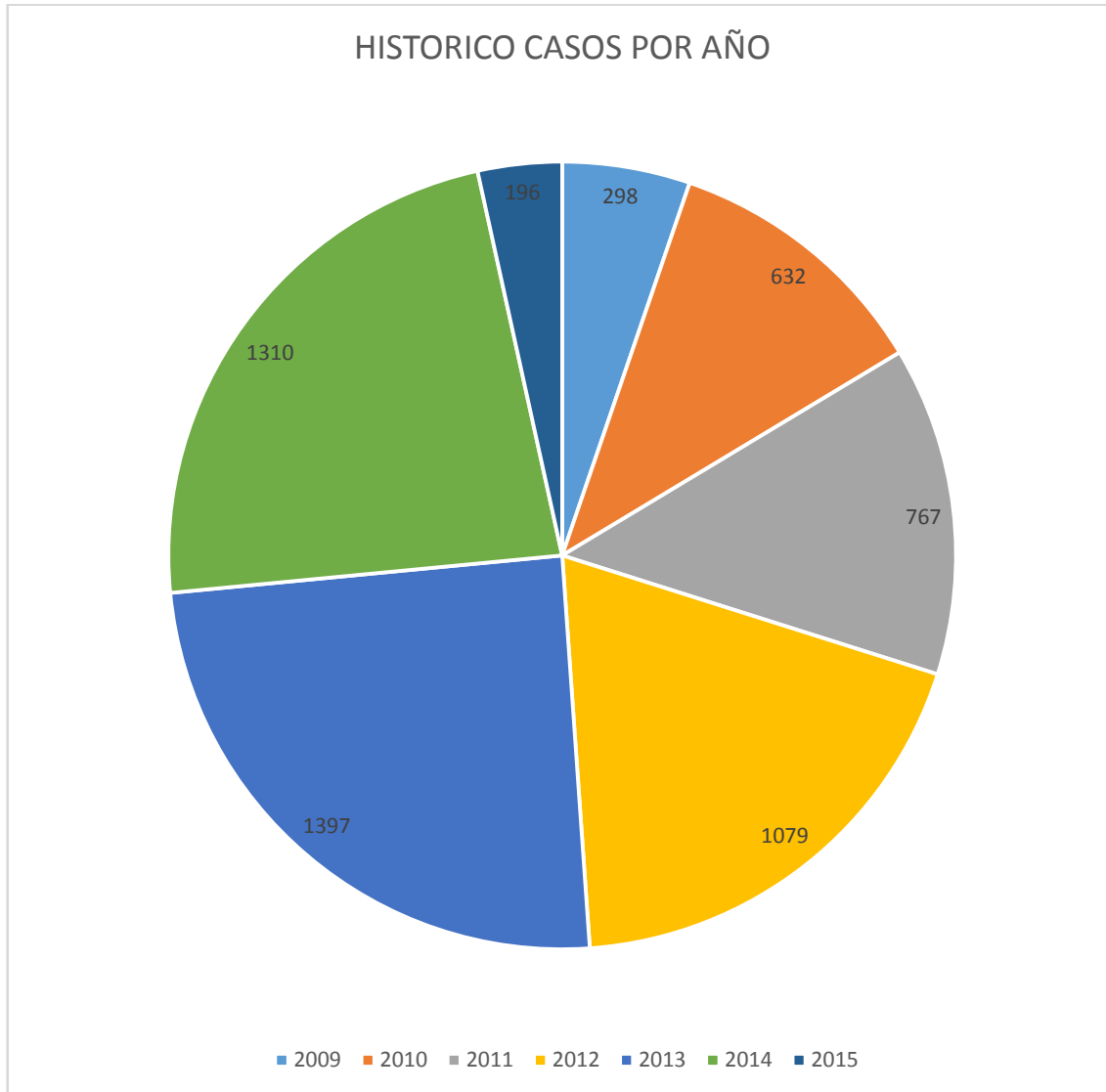
Esta ley busca que los adolescentes que cometan delitos respondan ante procesos judiciales que respeten todas las garantías propias del debido proceso y del derecho de la defensa. Deberán ser juzgados en un proceso penal de carácter diferenciado al de los adultos, especializado en todas las autoridades que lo apliquen y de carácter pedagógico que forme al adolescente en el respeto de los derechos de los demás. No serán juzgados como adultos y si se requiere una medida de privación de libertad, esta solo podrá ser hasta de 5 años y deberá cumplirse en centros especializados.

Entre los objetivos que persigue la ley se encuentran:

- Garantizar el disfrute de todos los niños(as) y adolescentes y asegurar su desarrollo integral y armónico en el seno de la sociedad colombiana.
- Consagrar mecanismos que posibiliten la protección integral de esos derechos, al establecer mecanismos que definen la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el estado.
- Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes que les han sido reconocidos por la constitución política y por el bloque de constitucionalidad.

La ley va dirigida a:

Todos los niños y niñas como sujetos plenos de derechos hasta la edad de 18 (dieciocho) años y, aquellos que, no obstante haber llegado a esta edad, se encuentran bajo medida de protección a cargo del Estado, incluido, neonatos, primera infancia, adolescentes y jóvenes sin discriminación alguna y bajo los principios de dignidad, igualdad, equidad y justicia social.



La tendencia es la de aumento de casos por año.

FUENTE: Defensoría de familia periodo 30 diciembre de 2009 a 28 de febrero de 2015

CONSOLIDADO BARRANQUILLA

CASOS PRESENTADOS TASA POBLACIONAL

CASOS 2015: 196

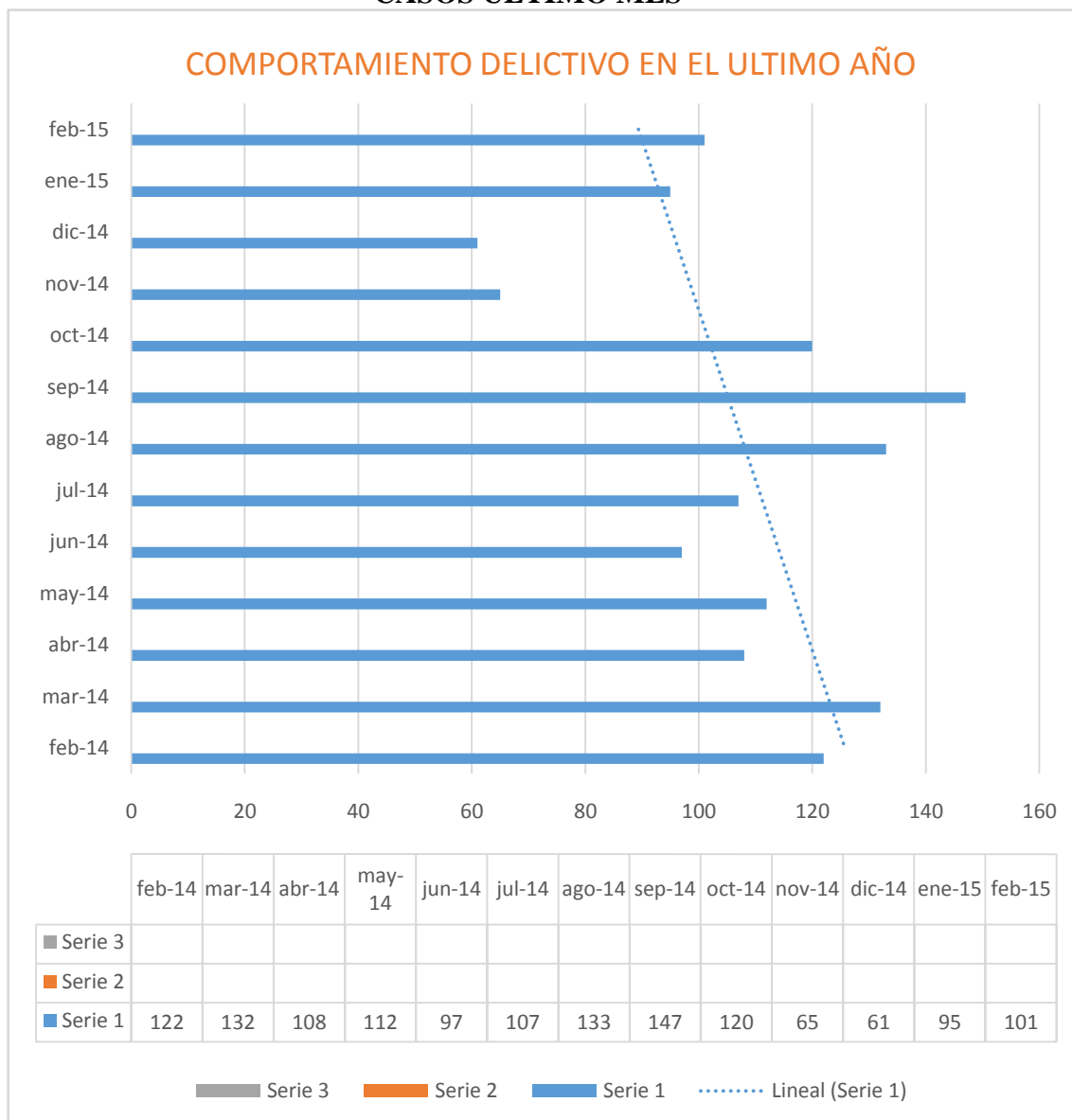
TOTAL POBLACION DANE 2015	POBLACION INFRACTORA DE 14 A 17 AÑOS	POBLACION SANCIONADA DE 14 A 17 AÑOS
173.646	190	137

En términos de tasa poblacional de adolescentes del país entre el rango de 14 a menores de 18 años está determinado en 173.646- DANE.

De la tasa poblacional de adolescentes de 14 a 17 años del país, la población infractora es del 0,11% y la población sancionada equivale al 0,008%.

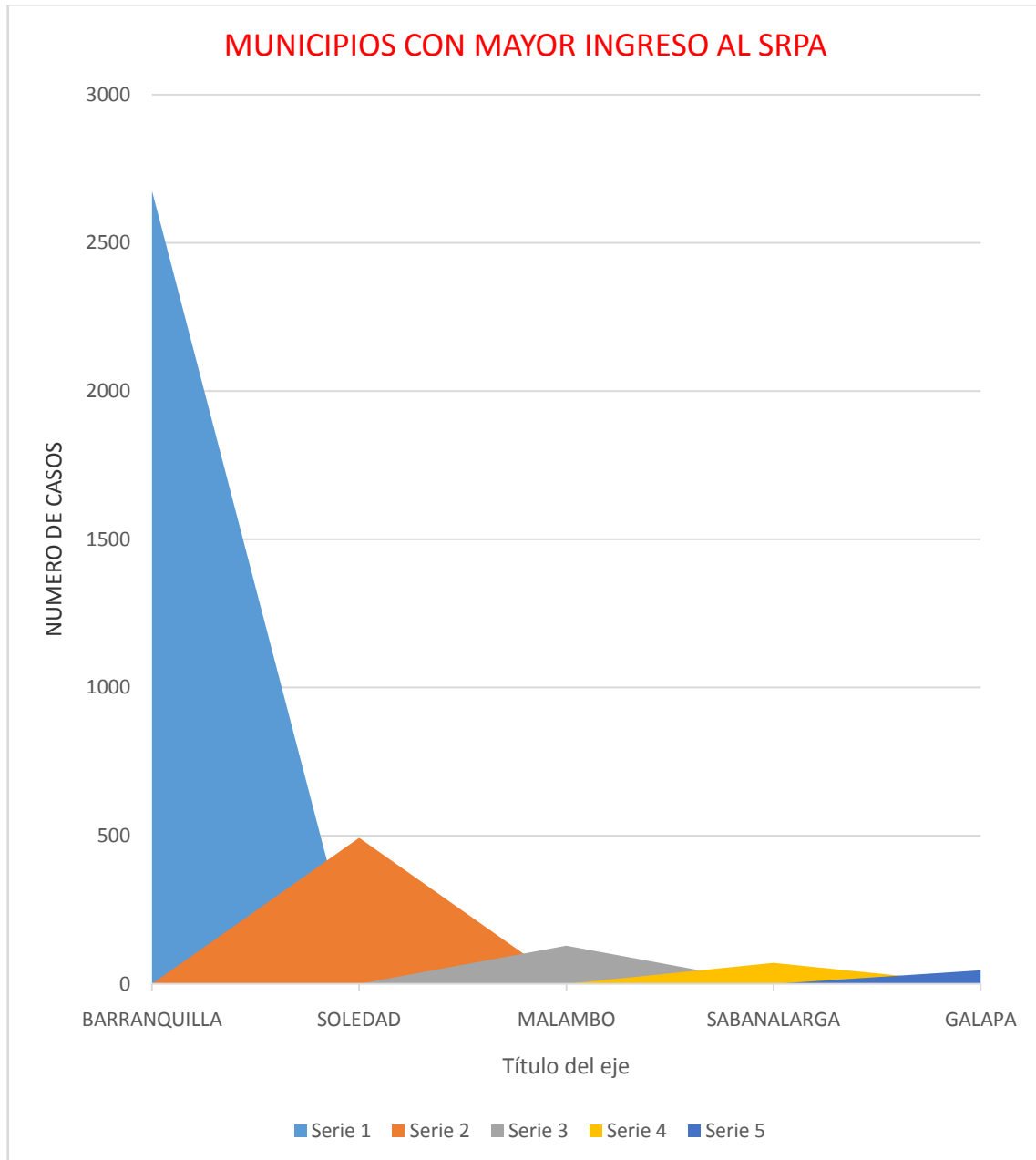
Por otra parte desde el punto de vista de solo los adolescentes del SRPA, del total de adolescentes en conflicto con la ley se han sancionado en lo corrido del 2015 el 69,90%.

CONSOLIDADO BARRANQUILLA
CASOS PRESENTADOS A LA LEY DEL PERIODO
1 DE FEBRERO DE 2014 A 28 DE FEBRERO DE 2015
CASOS ÚLTIMO MES



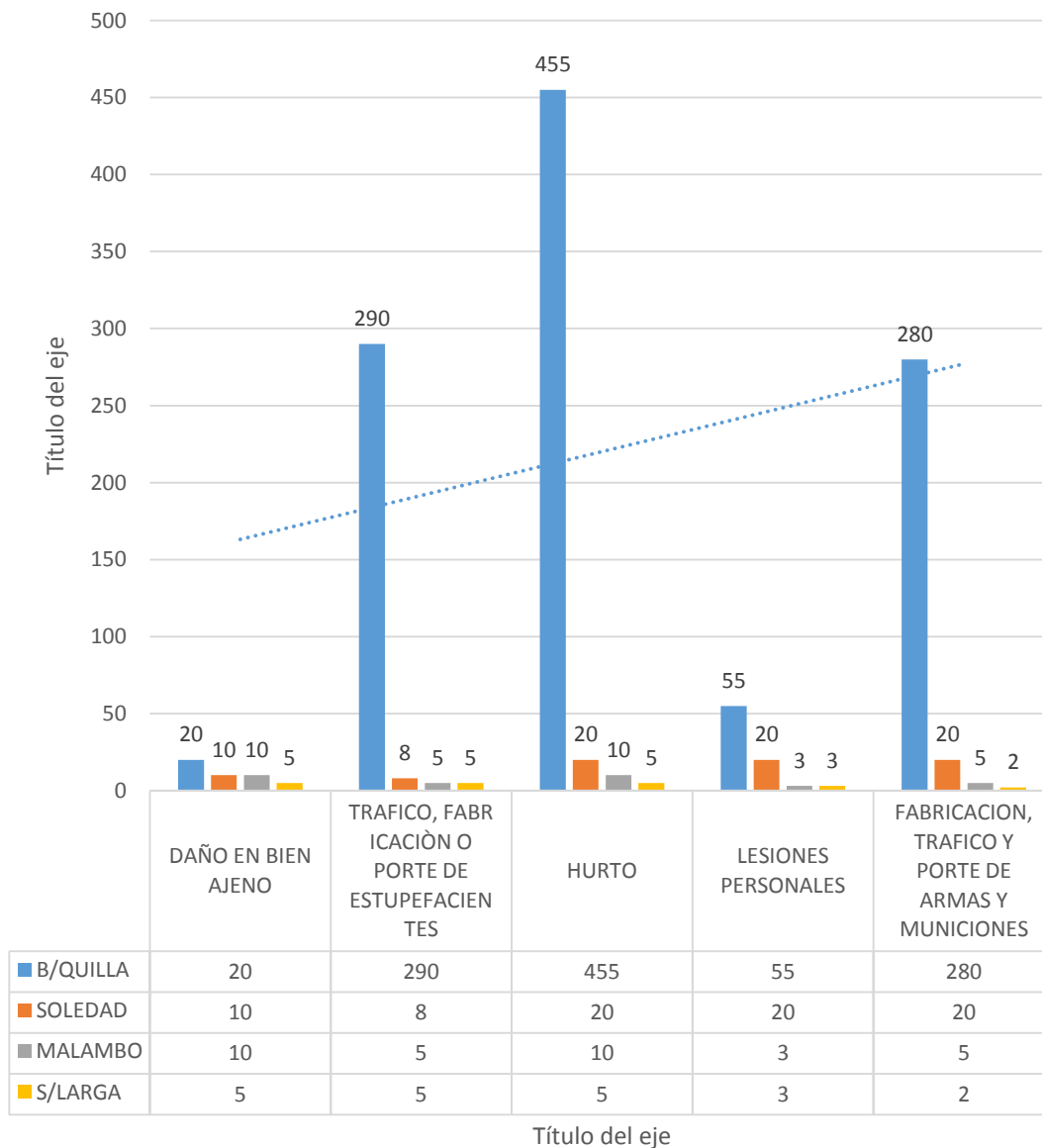
En el último año frente al mismo periodo del año anterior se ha presentado una disminución del -16,2% repartido:
 Enero: -15,22%

CONSOLIDADO BARRANQUILLA
CASOS REGIONALES CON MAYORES INGRESOS AL SRPA
AÑO 2012- 2015



**CONSOLIDADO BARRANQUILLA
DELITOS AÑO ACUMULADO 2012- 2015**

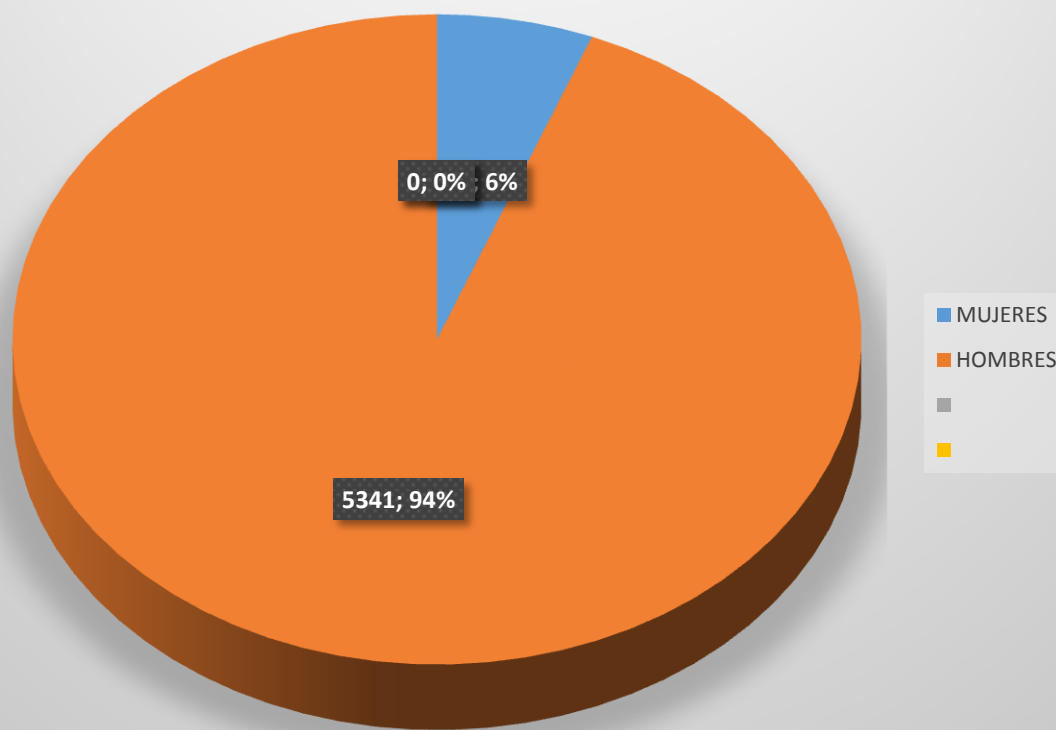
**DELITOS DE MAYOR OCURRENCIA EN LOS PRIMEROS
MUNICIPIOS**



■ B/QUILLA
 ■ SOLEDAD
 ■ MALAMBO
 ■ S/LARGA
 ⋯ Lineal (B/QUILLA)

CONSOLIDADO BARRANQUILLA
EDADES Y GENERO PERIODO CONSOLIDADO
1 DE ABRIL DE 2008 – 1 DE FEBRERO 2015

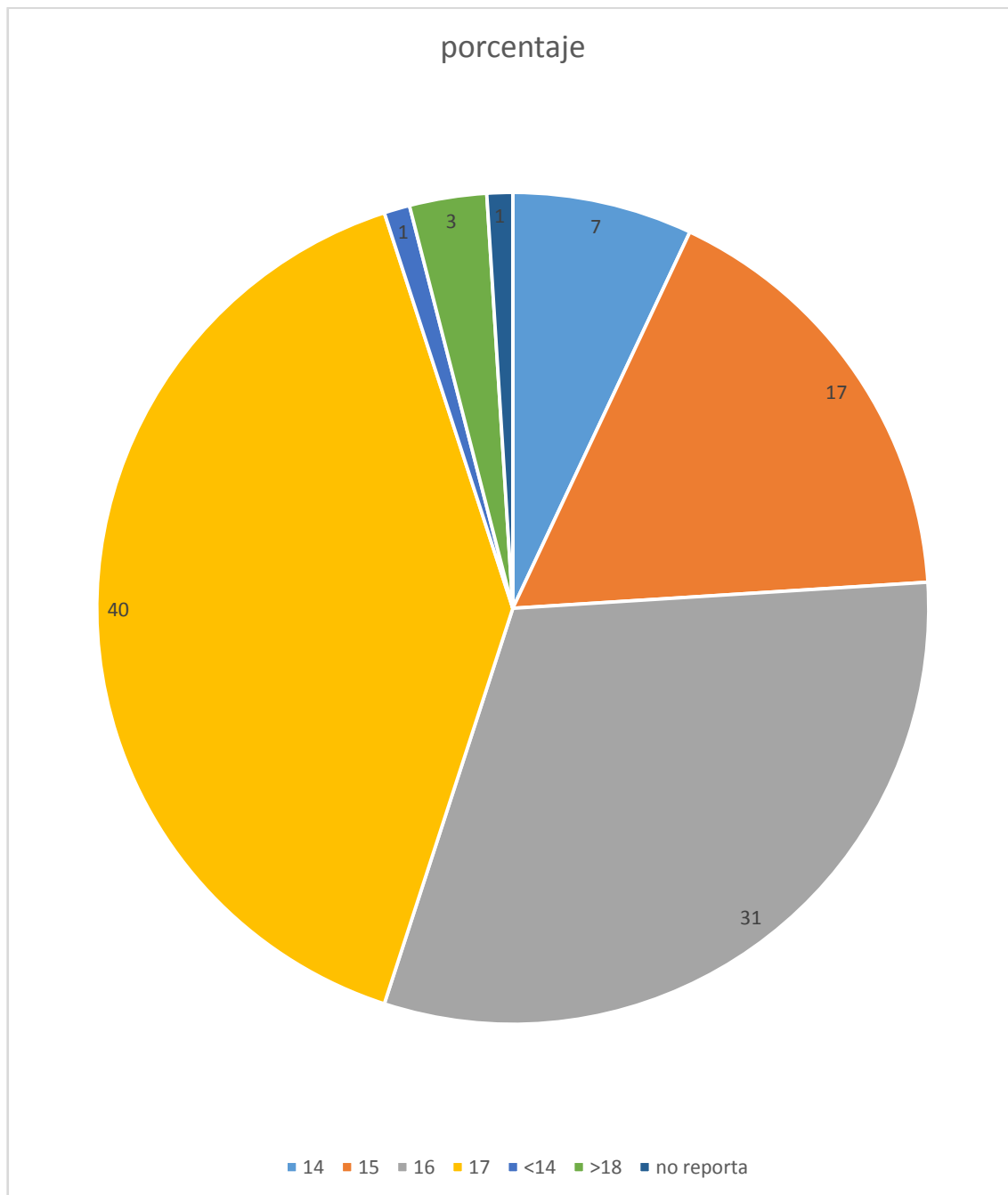
EDADES Y GENEROS



Mujeres 6%
Hombres 94%

Desde el inicio del SRPA la comisión de delitos realizados por hombres equivale a ese porcentaje.

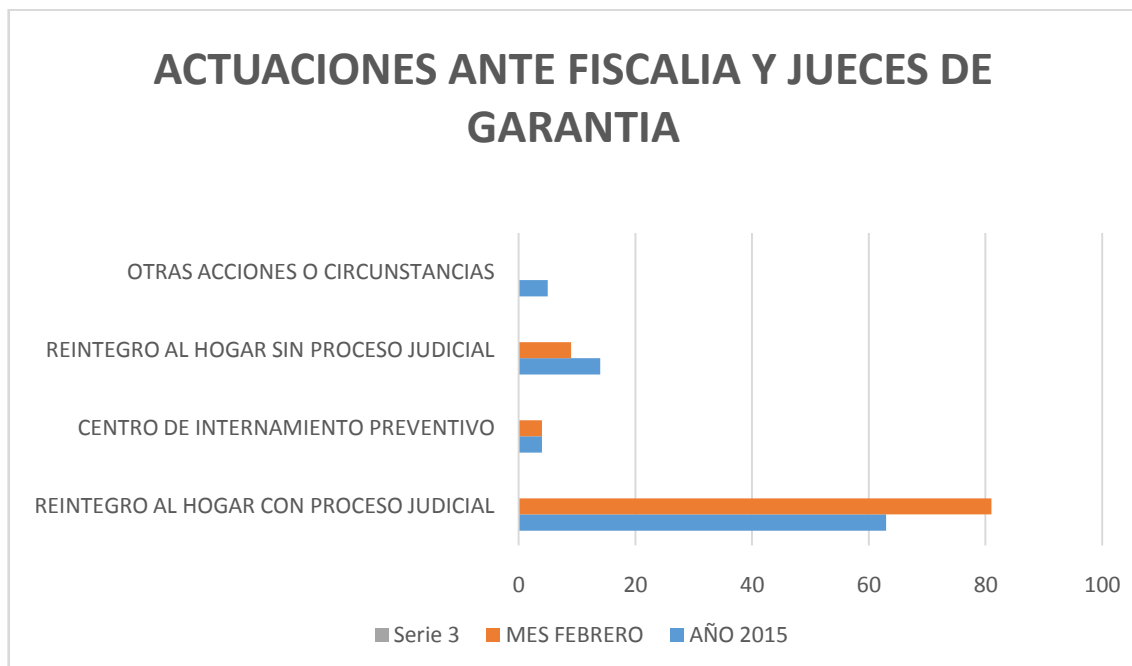
La mayor incidencia de delitos sigue concentrándose en las edades de 15 a 17 años en el siguiente porcentaje.



CONSOLIDADO BARRANQUILLA
PERIODO ANALIZADO: FEBRERO 2015
ACTUACIONES ANTE FISCALIA Y JUECES DE GARANTIA

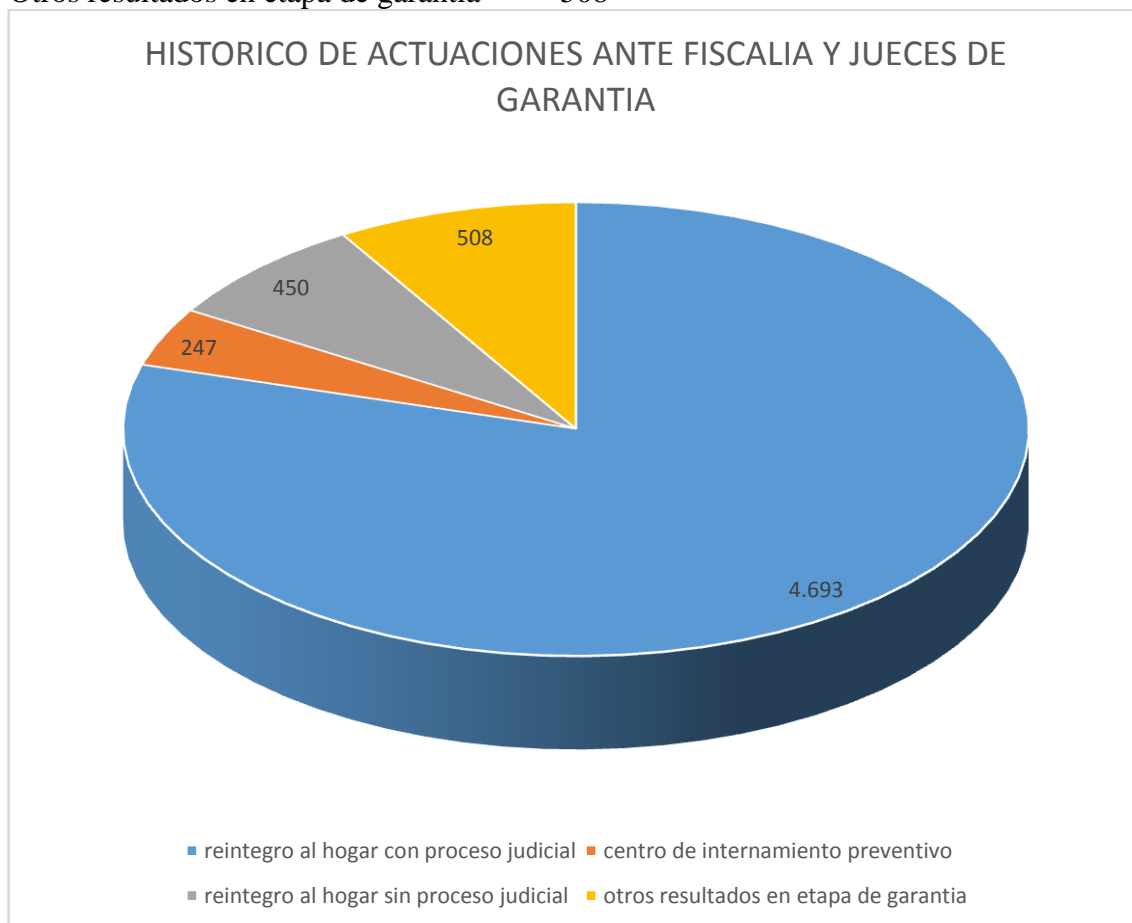
EN EL MES:	EN LO CORRIDO DEL AÑO	
Reintegro al hogar con proceso judicial	81	63
Centro De internamiento preventivo	4	4
Reintegro al hogar sin proceso judicial	9	14
Otras acciones o circunstancias	0	5

En lo corrido del año el 0,4% de los adolescentes que ingresan al SRPA se ha declarado mayor de 18 años.



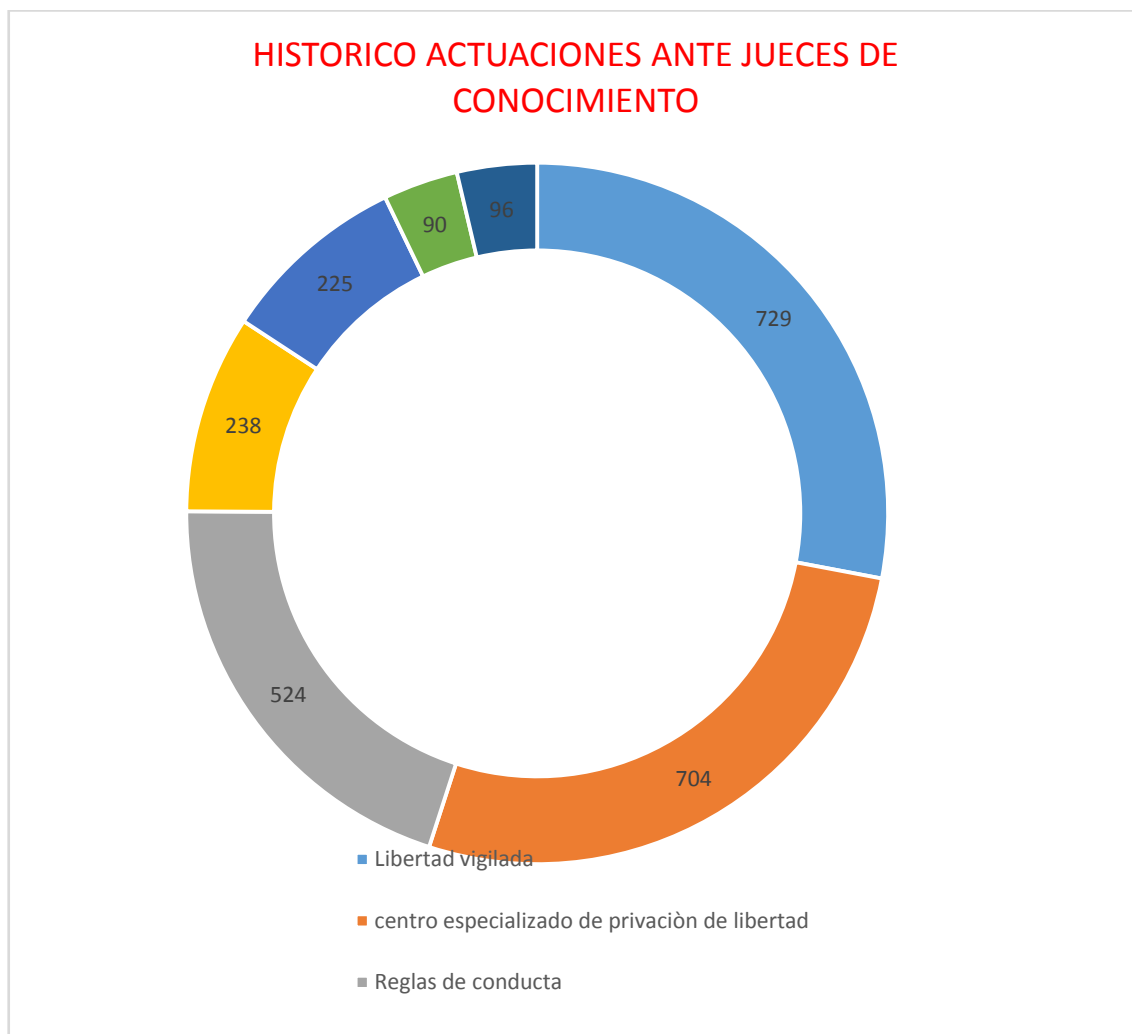
CONSOLIDADO BARRANQUILLA
PERIODO ANALIZADO
AÑO 2008 A FEBRERO DE 2015
HISTORICO DE ACTUACIONES ANTE FISCALIA Y JUCES DE
GARANTIA

Reintegro al hogar con proceso judicial	4.693
Centro de internamiento preventivo	247
Reintegro al hogar sin proceso judicial	450
Otros resultados en etapa de garantía	508



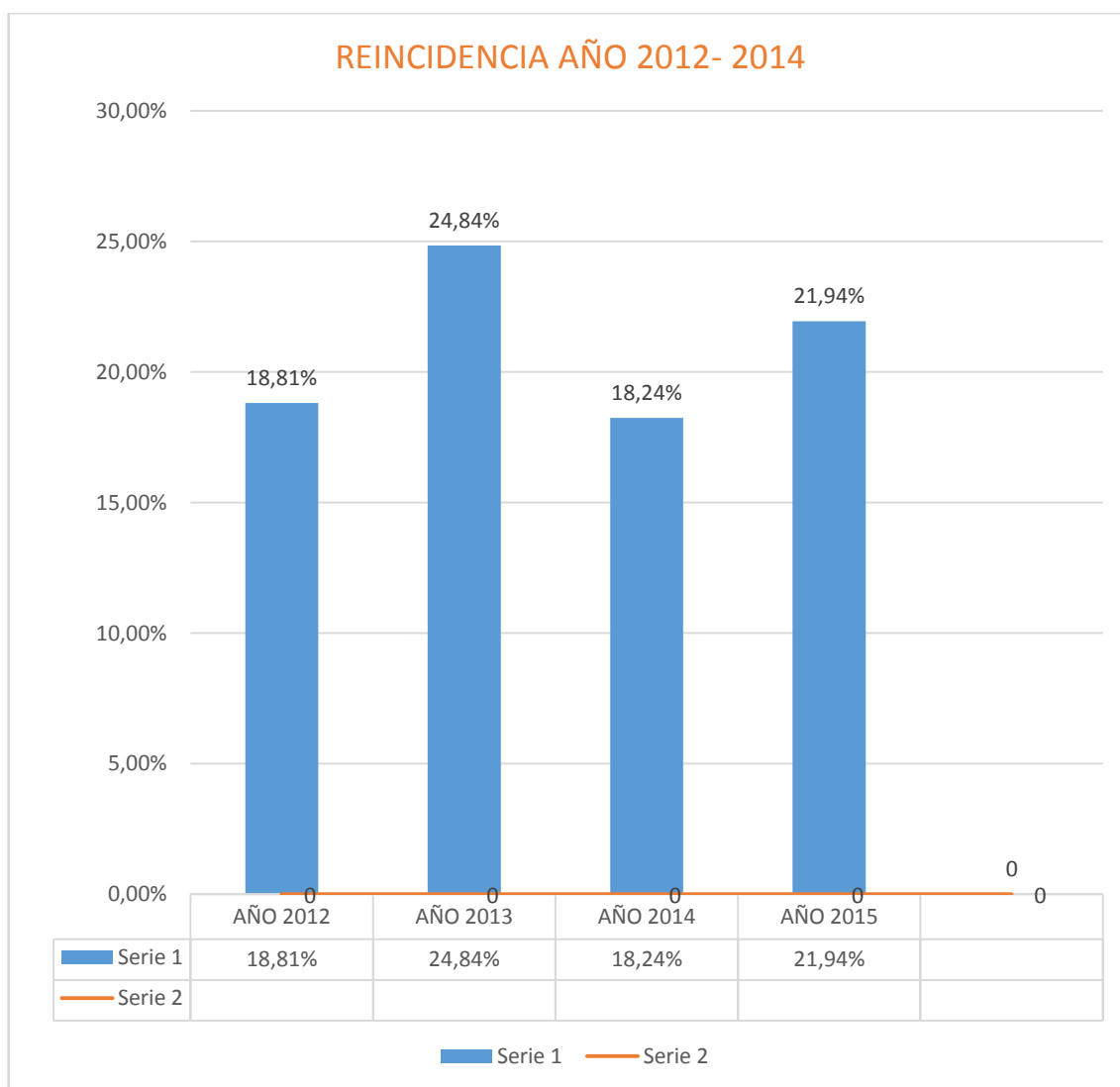
CONSOLIDADO BARRANQUILLA
PERIODO ANALIZADO: AÑO 2008- FEBRERO 2015
HISTORICO ACTUACIONES ANTE JUECES DE CONOCIMIENTO

Libertad vigilada	72
Centro especializado de privación de libertad	704
Reglas de conducta	524
Amonestación	238
Centro semicerrado	225
Prestación de servicio a la comunidad	90
Total otros resultados de la audiencia de conocimiento	96

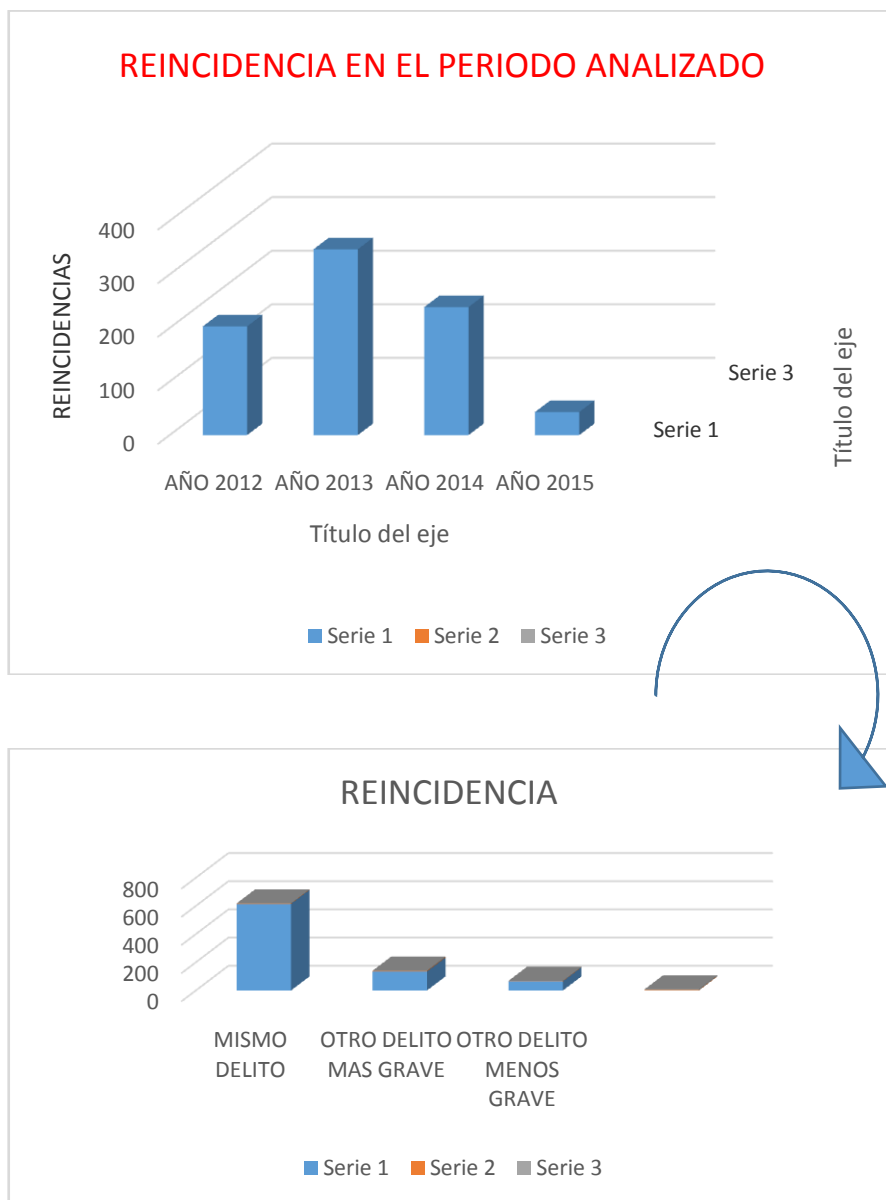


CONSOLIDADO BARRANQUILLA
REINCIDENCIA EN EL PERIODO ANALIZADO AÑO 2013- 2015

El índice de reiteración del delito frente a los ingresos del año 2013 es : 25 %		El índice de reiteración del delito frente a los ingresos del año 2014 es : 18 %		El índice de reiteración del delito frente a los ingresos del año 2015 es : 22 %	
No. Reincidentes 2013	109	No. Reincidentes 2013	239	No. Reincidentes 2015	43
No. Total ingresos SRPA	525	No. Total ingresos SRPA	525	No. Total ingresos SRPA	196



CONNSOLIDADO BARRANQUILLA
REINCIDENCIA EN EL PERIODO ANALIZADO
AÑO 2012 A FEBRERO DE 2015



La diferencia de este comparativo es de aquellos casos que no reportan la relación con el delito anteriormente reportado.

Fuente: www.icbf.gov.co

V. Análisis e interpretación de resultados

En el siguiente análisis se presentan las cifras y estimaciones de manera comparada entre la reincidencia de los adolescentes en la ciudad de Barranquilla entre el año 2012 al año 2015 y la reincidencia entre el mismo delito, otro delito más grave y otro menos grave.

Respecto a los egresados de centros cerrados la reincidencia tiende a ser menor que para el resto de las modalidades de sanción y aumentan de manera significativa al segundo año de su salida.

En cuanto a los centros semicerrados, es importante anotar que se presentan medidas de protección aplicables como son: Devolver el joven a sus familiares, libertad vigilada fundamentada en objetivos de seguridad, control y segregación de los adolescentes ya sea en cada recinto o en las circulaciones hacia la zona de talleres, servicios comunes, salas de acceso, evitando el contagio criminológico entre categoría de jóvenes sancionados por los jueces de menores para ejercer una supervisión judicial y no exista la posibilidad de reincidencia de los sujetos.

En virtud de las cifras resulta claro señalar que la reincidencia tiende a verse afectada de manera importante según el tipo de delito índice, siendo menor la reincidencia en sujetos que han completado de forma satisfactoria esta condena.

Además, se aprecia un mayor interés en organizar talleres de capacitación o seminarios de actualización por parte de los Defensores Públicos, lo que es muy favorable ya que el derecho va evolucionando y de esta manera no se quedan estancados en los antiguos modelos.

La aplicación de la justicia restaurativa contribuye a la reinserción del adolescente lo que es favorable y con ello se puede evitar la reincidencia del mismo, ya que de alguna manera, la sociedad no lo va a discriminar tan cruelmente, sino, más bien, se busca la reincorporación a la vida social y con ello a una reinserción laboral.

Uno de los mayores beneficios que se obtendrán con la implementación de la justicia restaurativa en la ciudad de Barranquilla es que contribuye a que el adolescente comprenda las consecuencias de sus actos, pero también le da la oportunidad de reivindicarse y de restituirse él mismo como persona.

Otro beneficio sería la reinserción del menor como un ente de bien y productivo para la familia y la sociedad y con ello evitar que vuelvan a cometer ilícitos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los enfoques de cómo determinar la responsabilidad penal han venido variando desde que el modelo tutelar orientado por las primeras corrientes positivas humanizadoras y pietistas propusieron sustituir la responsabilidad penal y la pena por la peligrosidad o necesidad de protección del menor, por medio de medidas educativas y correctoras.

Ahora bien el análisis de las estadísticas sobre el sistema de sanción penal en el distrito de Barranquilla durante los tres últimos años demuestra la poca efectividad que ésta ha tenido toda vez que el sistema de sanción penal para nada está teniendo en cuenta los siguientes aspectos como son la rehabilitación y la resocialización de calidad. Que esto se constituya en una alternativa al actual sistema punitivo, e inclusive, van en contravía de lo establecido en el artículo 19 de la ley 1098 del 2006 que establece “Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas”.

Se pudo establecer que es frecuente que las entidades que adelantan los procesos de resocialización no disponen de los recursos didácticos y pedagógicos, como también del personal idóneo y competente, para adelantar el proceso de resocialización de calidad y de esta forma cumplir con la labor que les ha sido encomendada. Lo anterior deja al descubierto la carencia de políticas públicas tendientes a dar cumplimiento a lo establecido por la ley.

Día a día mediante la transmisión de los medios de comunicación, somos testigos del aumento de la delincuencia juvenil en la ciudad de Barranquilla. Y se aprecia que gran parte de los actos delictuales son cometidos por jóvenes menores de edad.

Se trata por tanto, de adolescentes que poseen a su haber, y de manera creciente más de 40 detenciones a nivel del distrito de Barranquilla y que participan además como líderes de bandas especializadas que atacan a quema ropa a la población y que causa gran impacto a la población en diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a cifras establecidas por el programa liderado por la Alcaldía Distrital De Barranquilla “Barranquilla florece para todos”

Este aumento de la participación de los jóvenes en delitos tales como robo con violencia, robo con intimidación e incluso casos de violaciones, es una situación particularmente seria, que sumada al consumo de drogas y alcohol se ha transformado en un temor generalizado de la sociedad.

Puede agregarse además que en el pasado la gravedad de los delitos – así como su consumación – se vio avalada por la propia ley, que otorgaba a los menores caracteres de imputables. De esta manera al considerar que los menores no tenían la capacidad de discernimiento es decir, que un adolescente entre los 14 y 18 años no tenía consciencia suficiente de que matar, robar y violar eran considerados actos

delictuales, se fueron generando todos los incentivos para que más jóvenes entraran al mundo criminal. Se disculpaba así al menor por los delitos cometidos, aparte de fomentar una conducta irresponsable e irrespetuosa hacia la propiedad ajena. La falta de responsabilidad penal en los adolescentes, generó además que adultos usasen a los adolescentes como intermediarios en la ejecución de delitos de máxima gravedad.

Por otro lado y de manera paradójica, ocurría con la ley anterior que, algunos jueces decretaban a ciertos jóvenes de entre 16 y 18 años con capacidad de discernimiento, por lo que se les aplicaba el procedimiento penal adulto. Dicha medida resultaba bastante absurda ya que, en vez de recuperar al menor, se le insertaba en un ambiente criminológico, transformándolo en un delincuente avanzado y posterior participe de hechos que, como se sabe, afectan a la población actual. Por lo tanto la nueva ley 1098 de 2006 termina con el discernimiento y considera que la rehabilitación y la reinserción social son el eje central de todo el sistema, tanto en sus situaciones privativas de libertad como en las no privativas.

Entre las recomendaciones se puede tener en cuenta:

- Hace falta que el Consejo de la Judicatura emprenda un proceso de capacitación a los operadores de la administración de justicia en materia de adolescentes en la ciudad de Barranquilla.
- Es de imperiosa necesidad que la ley regularice la justicia restaurativa en adolescentes en conflicto con la ley penal y sobre todo en delitos, de perjuicio patrimonial que no afecten gravemente a la sociedad e inclusive en delitos de carácter culposos, a fin de que la actividad del distrito de

Barranquilla se dirija con más concentración hacia los delitos más graves que conmueven a la sociedad.

- La justicia penal en la ciudad de Barranquilla debe entrar en cánones de modernidad y modernización, es decir, aplicar los nuevos procesos del derecho procesal penal y que ahora están elevados, a la categoría de principios constitucionales, esto es la oralidad, el principio de oportunidad, el de mínima intervención penal, el de ahorro procesal y de resarcir el daño causado.
- Conocer y profundizar los riesgos y dificultades de los niños, niñas y adolescentes que crecen en situaciones sumamente difíciles, por lo que es tarea de todos tratar de implementar propuestas, desarrollar métodos y normas a favor de ellos para el mejoramiento de sus condiciones de vida y de la rehabilitación de los adolescentes inmersos en el cometimiento de delitos, comenzando desde los niños y niñas susceptibles de incursionar en este campo delictivo.
- Enseñar, guiar e inculcar principios, a elevar su autoestima, a respetar y exigir respeto, un adolescente que se encuentre entre por los 16 a 18 años de edad es mucho más difícil reinsertarlo a la sociedad que un niño, esto depende en muchos casos de los motivos que los llevaron a incursionar en este mundo de la delincuencia.

BIBLIOGRAFÍA

ACUÑA, F. Módulo de responsabilidad penal del adolescente, 2008.

AGUDELO BETANCUR, Nodier. Esquemas del delito, cursos del derecho penal. Ed. Temis S.A. 2010.

BELOF, Mary. Los derechos del niño en el sistema interamericano. Buenos Aires, del puerto, 2004 Ed. Los puertos 3ª edición.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Código de Infancia y Adolescencia. Art. 1º. Ed. Leyer. Bogotá, 2008.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constitución Nacional de 1991. Ed. Leyer. Bogotá, 2005.p.67

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1098 de 2006. Bogotá, 2006.

CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-203 de 2005. M.P.Manuel Cepeda Espinosa. Bogotá, 2005.

CERVELLO DONDERIS, Vicente; COLAS TUREGANO, Asunción La responsabilidad penal del Menor de Edad, Madrid, Tecnos, 2002.

CORREA GARCIA, Sergio. Justicia restaurativa y menores en conflicto con la ley penal, 2005

DE URBANO CASTRILLO, Eduardo; DE LA ROSA CORTINA, José Miguel. Comentarios a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, Navarra, Aranzadi. 2001, p. 2

DELGADO LLANOS. Programa de formación especializada para la implementación del régimen de responsabilidad penal para adolescentes. Escuela judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, 2008.

Díaz Cortez, Lina. Derecho penal del menor. Editorial Ratio Legis, 2015

ENCICLOPEDIA JURIDICA, 2015

ERIKSON, ERICK. Sociedad y adolescencia, 2004

FLORENZANO, RAMÓN. El adolescente y sus conductas de riesgo. Tercera edición. Ed. Uc. 2005

GARCIA MENDEZ, Emilio. Infancia de los derechos y la justicia. Editores del puerto, 2º edición actualizada, 2004

GARCIA RAMIREZ, Sergio. Foro sobre justicia penal y justicia para adolescentes, 1993

GARCÍA RIVAS, Nicolás. Aspectos críticos de la legislación penal del menor en RP, 2005. Ed. Salamanca, La Ley, 2005, p. 89.

GIMÉNEZ. SALINAS COLOMER, Esther. Principios básicos para un nuevo derecho penal juvenil, España 2005

HOLGUÍN GALVIS GUISELLE “construcción histórica del tratamiento jurídico del adolescente infractor de la ley penal colombiana (1837-2010)” Revista criminalidad de la policía nacional. Volumen 35 No.3, Paris 2002

MACHADO RUIZ, María Dolores. Minoría de Edad e Imputabilidad, Madrid, Ap, 2003.

MENDEZ AQUILES, Ética profesional. Undécima edición ed. Herrero Hermanos. Ensayo mayo de 2005.

Meriño Fernández, José V.


MORENO AMPARO. DEL BARRIO CRISTINA. La experiencia adolescente. Buenos Aires. Editorial Aique, 2000.

PEREZ PINZÓN, Álvaro Orlando. Situación actual del derecho de los menores en Colombia, en RP, Num.5 P.158

UNICEF. Manual de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ginebra Suiza. Atar Roto Press, 2004.

WWW.Barranquilla.gov.co Recuperado el 8 de agosto de 2.015

WWW.Icbf.gov.co. Recuperado el 8 de agosto de 2.015

	NORMAS PARA LA ENTREGA DE TESIS Y TRABAJOS DE GRADO A LA UNIDAD DE INFORMACION	VERSION: 02
		FECHA: Junio 2012
		CODIGO: DOC-VACRE-NETGUDI

ANEXO 1

CARTA DE ENTREGA Y AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO DE TESIS Y TRABAJOS DE GRADO

Barranquilla, Fecha junio 03 2016

Marque con una X

Tesis ☐ Trabajo de Grado ☒

Yo Jessica Yuliett Calvis Baldorno, identificado con C.C. No. 1'124'582'653 actuando en nombre propio y como autor de la tesis y/o trabajo de grado titulado Impacto Sociológico de la aplicación del sistema cda en los procesos penales presentado y aprobado en el año 2016 como requisito para optar al título de Abogado;

hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos de ser el caso, en formato digital o electrónico (DVD) y autorizo a la UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use en todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e importación) que me corresponden como creador de la obra objeto del presente documento.

Y autorizo a la Unidad de información, para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad de la Costa, CUC, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:


Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en la página Web de la Facultad, de la Unidad de información, en el repositorio institucional y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la institución y Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato DVD o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.

El AUTOR - ESTUDIANTES, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad ante la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE - AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad actúa como un tercero de buena fe.

Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo valor y tenor, en Barranquilla D.E.I.P., a los 03 días del mes de junio de Dos Mil 2016.

EL AUTOR - ESTUDIANTE.

Jessica Calvis B
FIRMA

	NORMAS PARA LA ENTREGA DE TESIS Y TRABAJOS DE GRADO A LA UNIDAD DE INFORMACION	VERSION: 02
		FECHA: Junio 2012
		CODIGO: DOC-VACRE-NETGUDI

ANEXO 2
FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS O TRABAJO DE GRADO:

Impacto Socioguridico de la Apliación del Sistema Oral en los procesos penales Contra...

SUBTÍTULO, SI LO TIENE:

AUTOR AUTORES

Apellidos Completos	Nombres Completos
<u>Calus Baklorino</u>	<u>Jesica Yuliett</u>

DIRECTOR (ES)

Apellidos Completos	Nombres Completos
<u>Alvarez Pertuz</u>	<u>Alia</u>

JURADO (S)

Apellidos Completos	Nombres Completos
<u>Pio Castañeda Nega</u>	<u>Pio</u>
<u>Freja Calao</u>	<u>Skait</u>

ASESOR (ES) O CODIRECTOR


Apellidos Completos	Nombres Completos
<u>Alvarez Pertuz</u>	<u>Alia</u>

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Abogado

FACULTAD: Derecho

PROGRAMA: Pregrado ☒ Especialización ☐

NOMBRE DEL PROGRAMA facultad de Derecho

	LICENCIA Y AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA PUBLICAR Y PERMITIR CONSULTA Y USO	VERSION: 01
		FECHA: OCTUBRE 2015
		CODIGO:DOC-VACRE-FLAPCU

LICENCIA Y AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA PUBLICAR Y PERMITIR CONSULTA Y USO

Barranquilla, Fecha: 23 junio de 2016

Parte 1. Términos de la Licencia general para publicación de obras en el repositorio institucional


- i. La vigencia es a partir de la fecha en que se incluye en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad con una antelación de dos meses antes de la correspondiente prórroga.
- ii. El Autor / Los autores:
 - Autorizan a la corporación Universidad de la Costa - CUC para publicar la obra en el formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) y conocen que dado que se publica en Internet por este hecho circula con un alcance mundial.
 - Aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto renuncian a recibir emolumento alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente Licencia y de la Licencia Creative Commons con que se publica.
 - Manifiestan que se trata de una obra original y la realizó o realizaron sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, obra sobre la que tiene (n) los derechos que autoriza (n) y que es él o ellos quienes asumen total responsabilidad por el contenido de su obra ante la CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA CUC y ante terceros. En todo caso la CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre del AUTOR o AUTORES y la fecha de publicación. Para todos los efectos la CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA – CUC, actúa como un tercero de buena fé.
 - Autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.
 - Aceptan que la Corporación Universidad de la Costa pueda convertir el documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.

SI EL DOCUMENTO SE BASA EN UN TRABAJO QUE HA SIDO PATROCINADO O APOYADO POR UNA AGENCIA O UNA ORGANIZACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LA COPRPORACION UNIVERSIDAD DELA COSTA - CUC, LOS AUTORES GARANTIZAN QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES REQUERIDOS POR EL RESPECTIVO CONTRATO O ACUERDO.

Parte 2. Autorización para publicar y permitir la consulta y uso de obras en el Repositorio Institucional de la Corporación Universidad de la Costa - CUC

Con base en este documento, Usted autoriza la publicación electrónica, consulta y uso de su obra por la Corporación Universidad de la Costa - CUC y sus usuarios de la siguiente manera, Usted:

- Otorga una (1) licencia especial para publicación de obras en el repositorio institucional de la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD De La COSTA - CUC (Parte 1) que

 UNIVERSIDAD DE LA COSTA 1976	LICENCIA Y AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA PUBLICAR Y PERMITIR CONSULTA Y USO	VERSION: 01
		FECHA: OCTUBRE 2015
		CODIGO: DOC-VACRE-FLAPCU

forma parte integral del presente documento y de la que ha recibido una (1) copia.

Si autorizo ☒ No autorizo ☐.

- Autoriza para que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados por Usted, con la Licencia Creative Commons Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 2.5 Colombia cuyo texto completo se puede consultar en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/> y que admite conocer.

Si autorizo ☒ No autorizo ☐. Si Usted no autoriza para que la obra sea licenciada en los términos expuestos y opta por una opción legal diferente descríbala: _____

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR:

Tipo de documento:

Artículo _____ Libro _____ Capítulo de Libro _____ Informe / avance de Investigación _____ Tesis ☒
Ponencia / Conferencia _____ Video _____ Objeto de Aprendizaje _____ Otro _____

Título de la obra(s):

Impacto Socio jurídico de la Aplicación del
Sistema Oral en los procesos Penales Contra
Adolescentes adelantados en la ciudad de

Autor (es):

Mónica Galvis Balderino Jessy G. 11291582163
Nombre Firma C.C.

Nombre Firma C.C.

Nombre Firma C.C.

Nombre Firma C.C.

Datos contacto: (teléfono, correo Dirección)

3185735534 jessygalvis0611@hotmail.com Calle 65 # 43-30

Fecha entrega (D/M/A): 07-06-2016